



29.  
**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA  
DE MÉXICO**

**ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES  
ACATLÁN**

**INTRASCENDENCIA JURIDICA DE LOS ALEGATOS  
EN EL PROCESO CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL.**

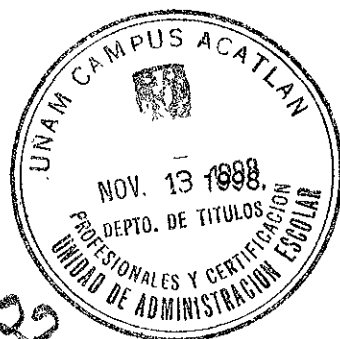
**T E S I S**  
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:  
**LICENCIADO EN DERECHO**  
P R E S E N T A :  
**RENE HERNANDEZ SOSA**

**ASESOR DE TESIS: LIC. DULCE MARIA R. AZCONA FERNANDEZ.**



**UNAM  
CAMPUS ACATLÁN** ACATLÁN, ESTADO DE MÉXICO.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



26 8022



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**

**Tesis Digitales**

**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**

**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

**Dios :**

**Te doy gracias porque con tu bondad  
infinita me has otorgado la gracia de  
llegar hasta este momento trascendental  
en mi vida.**

# INDICE

## PAG.

<b>CAPITULO PRIMERO</b> .....	1
Introducción .....	2
Antecedentes Históricos del Proceso .....	3
El Proceso en los Pueblos Antiguos .....	6
En Egipto .....	6
En Babilonia .....	8
En el Pueblo Hebreo .....	10
El Proceso en el Mundo Clásico del Derecho .....	11
En Grecia .....	14
En Roma .....	27
Evolución Histórica del Derecho Procesal en México .....	27
En la Epoca Prehispánica .....	29
En la Epoca Colonial .....	32
En la Epoca Independiente .....	36

# INDICE

PAG.

<b>CAPITULO SEGUNDO</b>	<b>38</b>
Formalidades del Proceso Contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para Distrito Federal	39
Las Fases Procesales	39
Fase Postulatoria	41
Concepto de Demanda:	42
Forma y Contenido de la Demanda	43
Efectos Derivados de la Interposición de la Demanda	45
El Emplazamiento y sus Efectos	46
Fase Probatoria	50
Concepto de Prueba Procesal	50
Principios que Rigen la Prueba Procesal	50
Objeto de la Prueba	54
Términos Probatorios	56
Condiciones que debe Reunir la Prueba Para su Admisión	63
Formalidades que deben Satisfacerse para el Desahogo de las Pruebas	64
Los Medios de Pruebas	68
La Prueba Confesional	71
La Prueba Documental	73
La Prueba Pericial	74

# INDICE

## PAG.

La Prueba Testimonial .....	75
La Prueba de Inspección Judicial .....	77
La Prueba Presuncional .....	80
Fase Conclusiva .....	85
Contenido de la Fase Conclusiva .....	85
Definición Etimológica de los Alegatos .....	85
Concepto de los Alegatos Según la Doctrina .....	86
Naturaleza Jurídica de los Alegatos .....	88
Momento Idóneo para Alegar .....	92
<b>CAPITULO TERCERO .....</b>	<b>94</b>
Intrascendencia Jurídica de los Alegatos en el Proceso Civil en el Distrito Federal .....	95
Los Alegatos como Etapa Previa a la Citación para Sentencia .....	95
Efectos Derivados de la Omisión de la Expresión de Alegatos en el Proceso Civil en el Distrito Federal .....	97
Efectos Derivados de la Expresión de Alegatos .....	100
Contenido de la Resolución que Recae a la Expresión de Alegatos ..	102
Observaciones Relacionadas con el Acuerdo Emitido por la Autoridad a Partir de la Expresión de Alegatos .....	104

# INDICE

## PAG.

Intrascendencia de los Alegatos en la Sentencia que da Fin al Proceso Civil en el Distrito Federal .....	114
<b>CAPITULO CUARTO .....</b>	<b>118</b>
Análisis Comparativo de la Etapa de Alegatos en otras Ramas del Derecho .....	119
En el Derecho Penal .....	120
En el Derecho Mercantil .....	124
En el Derecho Fiscal .....	126
En el Derecho Administrativo .....	130
En el Derecho Agrario .....	133
En el Derecho Laboral .....	137
En el Juicio Constitucional .....	143

# **CAPITULO PRIMERO**

## **ANTECEDENTES HISTORICOS DEL PROCESO**



## INTRODUCCION

*El Derecho es el resultado de una prolongada evolución que tiene como origen la era donde predominaba la Ley del más fuerte, hasta llegar al Proceso Jurídico actual que es la forma más evolucionada e Institucional de solución de los conflictos sociales. Gramaticalmente a la palabra Proceso se le define como la sucesión de actos vinculados entre sí, respecto a un objeto común, sin embargo este es un concepto general que se puede aplicar a todo tipo de Proceso, por ejemplo el Proceso químico, físico, biológico, industrial, etcétera.*

Para el desarrollo de este capítulo estableceremos la definición del Proceso Jurídico, el cual hemos formado a partir del estudio previo de diferentes autores procesalistas, entendiéndose éste como el conjunto de actos Jurídicos que se derivan de la presentación de una demanda, encaminados a la obtención de una resolución jurisdiccional que resuelva la controversia planteada, en este capítulo expondremos el grado de evolución del Proceso en que se encontraban los pueblos antiguos.

## ANTECEDENTES HISTORICOS DEL PROCESO

La palabra Proceso proviene del vocablo latino "*Procedere*" que indica avanzar, camino a recorrer, trayectoria a seguir en un sentido o hacia un destino o fin determinado. Cabe aclarar que el procesalista español Menéndez Pidal<sup>[1]</sup> nos señala que el término en cuestión viene del derecho canónico y deriva de la palabra "*Procedo*" que significa avanzar. Acorde con el origen del término, este autor define al Proceso como, la coordinación sucesiva de actos jurídicos derivados del ejercicio de una Acción Procesal y que tiene por objeto obtener una decisión de carácter jurisdiccional.

En el campo de la ciencia del Derecho encontramos al "*Proceso Jurídico*", según el Mtro. Eduardo Pallares<sup>[2]</sup> lo define como "*Una serie de actos jurídicos que se suceden regularmente en el tiempo y se encuentran concatenados entre sí por el fin u objeto que se quiera realizar entre ellos*". En este sentido quedan encuadrados en el término Proceso, aquellos de carácter Legislativo, Administrativo y Judicial para el tro. Eduardo J. Couture<sup>[3]</sup> entre estos tres Procesos existe unidad desde el punto de

---

[1] Menéndez Pidal. Elementos de Derecho Procesal Civil. Madrid, España. 1935. Pág. 175.

[2] Pallares Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. 1953. México. Pág. 636.

[3] J. Couture Eduardo. Introducción al Estudio del Proceso Civil Buenos Aire, Argentina 1953 Págs. 55 y 56.

vista estructural, pero en su finalidad son diferentes ya que el primero con su debate de los representantes del pueblo apunta a la sanción de la Ley, el segundo con su acopio de antecedentes técnicos está dirigido hacia el gobierno y la Administración Pública y el tercero con su debate de las partes en conflicto interesadas en la recaudación de pruebas encaminadas a la obtención de una sentencia definitiva que les favorezca.

Se ha señalado que de los distintos procesos el de mayor trascendencia lo constituye el de carácter Jurisdiccional, que es aquel que se tramita ante los órganos representativos del Estado por disposición de la Ley, los cuales están revestidos de Jurisdicción, es decir que tienen facultad para resolver los conflictos de intereses que ante ellos se promuevan y de Ejecutar las Resoluciones que en el ejercicio de sus funciones pronuncien. En este orden de ideas Ugo Rocco nos dice que: *"El Proceso es el desarrollo de una de las tres funciones fundamentales del Estado"*. La Función Judicial y Jurisdiccional y es por eso el conjunto de las actividades necesarias al desenvolvimiento de la función Judicial.

Para Jaime Guasp el Proceso es: *"Un Instrumento de satisfacción de pretensiones"*<sup>[4]</sup> entendiéndose por satisfacción el hecho de que el poder público

---

[4] Guasp Jaime Derecho Procesal Civil. Madrid, España. 1961. Pág. 12.

reciba, examine y decida respecto de la queja que ante él se plantee, actuando o denegando su actuación según parezca o no fundada; de ahí que no siempre se da la razón a quien acuda ante el órgano jurisdiccional, así también dentro del campo Jurídico nos señala que por Pretensión ha de entenderse como: *La Reclamación Formalmente dirigida por un miembro de la comunidad frente a otro ante el órgano público específicamente instituido para satisfacerla.*

Para este autor el Proceso está ordenado con fundamento en tres postulados, que él los hace derivar de su concepto antes citado, menciona que todo Proceso exige una pretensión, toda pretensión lleva consigo un Proceso y ningún Proceso puede ser mayor o menor que la correspondiente pretensión.

El Proceso no se produce en su totalidad de manera instantánea sino que se despliega en el tiempo. Es decir, no se produce en un sólo acto de manera cabal, sino que se desarrolla a través de un conjunto de actos que se suceden en el tiempo.

Se ha establecido ya, que el Proceso es un conjunto complejo de actos que se despliega y se desarrolla a lo largo de espacios temporales más o menos amplios. Como tal tiene pues, un principio y un fin y cada acto que se le integra va sucediendo a otros desde un primer acto inicial hasta un último acto final.

Es criterio uniforme para la generalidad de los autores procesalistas que el Proceso tiene su inicio en la Demanda y su fin en la sentencia que resuelve la controversia.

## **EL PROCESO EN LOS PUEBLOS ANTIGUOS**

### **En Egipto**

Este pueblo hasta donde se sabe no contaron con un cuerpo de Leyes que constituyeran las normas procesales a seguir, ya que éstos no llegaron a clasificar y dividir las controversias jurídicas, en la forma en que en la actualidad se hace en nuestro país.

El dato que nos da el tratadista Italiano Diodoro de Sicilia<sup>[5]</sup>, respecto al Proceso Judicial entre los egipcios, hace referencia a que predomina en las controversias de dicho pueblo el principio de la escritura, es decir todos los asuntos se tramitaban por escrito teniendo la obligación las partes de redactar sus demandas

---

[5] Vicente y Caravantes, José de. Opus Cit. Tomo I. Pág. 19.

ya que no se conocían los legistas. La sentencia que emitía el tribunal no se hacía en forma escrita, sino que el presidente de esa autoridad ponía la imagen de la verdad que pendía de su cuello en la frente del que había triunfado en el juicio, es decir dicho acto constituía el fallo de la controversia planteada y ganaba a quien le pusieran en la frente la imagen de la verdad.

En el Proceso Egipcio se contemplaba el principio de la doble instancia, ya que se conocían diversas jerarquías judiciales y recursos de unos a otros jueces, lo que daba por resultado que los juicios fuesen bi-instanciales. A este respecto Caravantes nos reseña lo siguiente: *"El Egipto se hallaba dividido en tres distritos o partes, subdivididos en diez provincias y éstas a su vez en tres jurisdicciones o nomos."*

Cada una de estas jurisdicciones se hallaba presidida por un Decano, que era elegido de entre los sacerdotes. Y a estos jueces estaba sometido el conocimiento, en primera instancia, no sólo de los asuntos concernientes a la religión y de las causas criminales sino también de los negocios civiles. La Segunda Instancia o Apelación era de competencia de otros jueces o Tribunales Superiores que se hallaban establecidos en Tebas, Menfis y Heliopolis"<sup>[6]</sup>.

---

[6] Vicente y Caravantes, José de. Tratado Histórico Filosófico de los Procedimientos Judiciales en Materia Civil, Según la Nueva Ley de Enjuiciamiento. Madrid, España 1856 Tomo I. Pág. 356.

Con respecto a la tramitación y forma de dictarse los fallos en los juicios, Caravantes señala que lo que Diódoro de Sicilia ha dicho no pasa de ser una fábula nacida de su imaginación poética, ya que de ser como se ha dicho la justicia sería embarazosa, sobre todo teniendo en cuenta que existen pleitos en los que no se decide en todos sus puntos a favor de una sola de las partes, y que las sentencias llegan a contener restricciones o condiciones respecto de las pretensiones demandadas, asimismo no se puede creer que todos los egipcios supieran leer y escribir a la vez y que dominaran la ciencia del derecho, de tal manera que pudieran redactar por sí mismos sus demandas, en consecuencia, es evidente que en el Proceso Judicial que existía en el pueblo egipcio no se contemplaba el período de Alegatos.

Los juicios en Materia Civil en el pueblo egipcio eran sumarios, toda vez que como menciona Caravantes, los contendientes presentaban sus reclamaciones por escrito y en una comparecencia el juez resolvía a quien le asistía la razón.

## **En Babilonia**

Poco puede decirse de los principios que regían los procedimientos en Babilonia, no existió un cuerpo de Leyes que regulara esta Institución, aunque se dice

que para la satisfacción de los derechos de los habitantes de aquel pueblo existía una reiteración constante de actos que bien pudieran considerarse como constitutivos de un procedimiento judicial, mediante eso actos se ponían en juego las acciones, se aportaban y desahogaban pruebas y se dictaba la sentencia respectiva.

Del Procedimiento desarrollado entre los Babilonios, sólo hay noticias de que regía el principio de la Doble Instancia, ya que los fallos dictados por los jueces ante los que se ventilaba un litigio, podían ser materia de apelación, correspondiendo su conocimiento al Rey, quien era la más alta autoridad en Materia Judicial; las Sentencias que ponían fin a los conflictos entre los habitantes de Babilonia tendían a la realización de la idea de justicia que existía entre ellos, misma que estaba basada en la reparación y composición en la medida del daño causado, siendo por ello que era de aplicación constante la Ley del Tali6n, a la cual sigui6 el C6digo de Hammurab6 en el que se pugnaba porque las personas a quienes se dirigi6, ajustaran su vida a lo mandado en 6l, as6 dicho cuerpo de Leyes terminaba bendiciendo a todos aquellos que observaran fielmente sus preceptos y maldec6 a quien no diera cumplimiento a dicho ordenamiento.



## En el Pueblo Hebreo

En esta Cultura ya encontramos una estructura más desarrollada en el ámbito judicial, existían dos distintas clases de procedimiento, uno en el que se ventilaban controversias de naturaleza Civil y otro en materia criminal, en el primero el actor presentaba su demanda verbalmente haciéndose acompañar de la persona que lo había agraviado, otra forma era en la que comparecía sólo el agraviado y se le hacía llegar al demandado un citatorio, si se llegaba el caso de que no compareciera, recaía sobre él "*Una Excomuni3n Menor*", que se le quitaba hasta que comparecía ante la autoridad, ya presentes las partes el juez las exhortaba a llegar a un convenio si llegaban a una conciliaci3n dicho acuerdo tena el car3cter de Sentencia, denomin3ndose a dicho acto Comparecencia Conciliatoria, si no se llegaba a alg3n acuerdo, el juez se concretaba a aplicar la Ley y a resolver conforme a 3sta.

Respecto a las causas criminales, el Demandado poda ser el perjudicado directamente o los parientes m3s cercanos, existiendo para dicha rama un procedimiento perfectamente bien definido. Para resolver ciertos delitos, por ejemplo, el Homicidio, ya agotada la secuela procesal la persona que resultaba culpable, era entregado al demandante para que 3l o alguno de su parientes cercanos se vengaran con el reo. La Ley establec3a que dicho supuesto s3lo se diera en caso

de que el homicidio hubiera sido intencional, para el caso de que no fuera así, se desterraba al reo a las ciudades de Asilo (Bezer, Ramat y Golán), ciudades en donde ya no podían ser perseguidos por los ofendidos o por sus familiares, teniendo la obligación el reo de morar en la ciudad de asilo hasta la muerte del sumo sacerdote y ya sucediendo esto, el reo ya podía regresar a su ciudad de origen. En otros delitos se llevaba a cabo una tramitación del juicio que abarcaba tres fases, la primera la Acusación, la segunda el Ofrecimiento de Pruebas y la tercera en la que se daba la sentencia, no existiendo en dichos procedimientos el período de alegatos, en la mayoría de los casos en la rama criminal en que el reo resultaba culpable se le aplicaba la Ley del Talión.

## **EL PROCESO EN EL MUNDO CLASICO DEL DERECHO**

### **En Grecia**

Entre los griegos el Proceso de los Juicios estuvo bien regulado por normas basadas en principios bien definidos como son: El de Publicidad, Buena Fé, Lealtad en los Juicios, Oralidad, y Equidad; éstos aseguraban que las controversias en este pueblo se llevaron a cabo en la medida más justa, toda vez que imperaba en ellos la

satisfacción de sus formalidades previamente establecidas por las autoridades que daban como resultado la impartición de justicia basada en la equidad, entendiéndose dichos principios de la siguiente manera:

#### **a) De Publicidad**

Los griegos se caracterizaron por su tinte democrático en sus juicios, así como su tendencia publicista, es decir, los celebraban en el Agora (Plaza Pública), a cielo descubierto a fin de que el pueblo observara la imparcialidad del tribunal al impartir justicia, así se decía que *"se sentenciaba ante el sol y a presencia de los dioses que contemplaban el juicio desde el Olimpo"*<sup>[7]</sup>. La Democracia griega también era observada en materia judicial, siendo de elección popular el puesto de juez y no podía excusarse su cargo.

#### **b) Buena Fe y Lealtad en los Juicios**

Este principio operaba de la siguiente manera, cuando el demandado se presentaba al juicio y no había forma de que hiciera valer ninguna excepción (por ejemplo, la de no tener lugar aquella acción por haber sido absuelto o condenado respecto de lo demandado, la de no ejercitar la acción en tiempo, la de incompetencia del tribunal, la de dolo, miedo,

---

[7] Vicente y Caravantes José. Tratado Histórico Crítico Filosófico de los Procedimientos Judiciales. Madrid, España. Tomo I. 1856. Pág. 356.

transacción o prescripción, el litigante juraba en compañía del demandante que su comportamiento ante la autoridad sería libre de dolo, sin malicia y que su actuar estaría basado en la lealtad a sus buenos principios, para prevenir su temeridad, los litigantes depositaban ante el juez la décima parte del valor del juicio, suma que perdía el actor si era vencido y por el contrario si perdía el demandado la cantidad que depositaba se le entregaba al actor. Es un hecho que encontramos esta práctica respecto de los litigantes temerarios, en la legislación romana en materia procesal se suponía que quien acudía ante los jueces a ejercitar una acción o a defenderse es porque se creía con derecho a hacerlo.

### c) El de Oralidad

Sabido es que la oratoria adquirió gran desarrollo en el pueblo griego, fue Pericles el primero que hizo que la elocuencia pasase al campo de la tramitación de los juicios. Así a partir de la época del celebre estadista y orador griego (499-429 A.C.) podían los contendientes en el juicio hacerse asistir de oradores muchos de los cuales pronunciaban por sí mismos sus discursos, otros tan sólo los redactaban y las partes los leían ante los jueces.

De lo expuesto se concluye, que a la Oralidad en el procedimiento griego no se le daba el significado que actualmente tiene, sino que se traducía en el uso del lenguaje hablado por parte de los litigantes a fin de convencer al tribunal de la certeza de sus argumentos.

#### **d) El de Equidad**

Los griegos tenían la pretensión de que los juicios se ajustaran a las reglas de la equidad y de la justicia, es decir que los contendientes fueran tratados de manera igual, haciendo caso omiso a su calidad personal o a la de su defensor a fin de preservar esa pretensión, fue dictada una Ley que prohibió a los oradores corromper al ánimo de los jueces con frases lamentables que pudieran excitar la conmiseración, también con igual motivo el Areópago (Tribunal de Asuntos Criminales) celebraba sus sesiones de noche a fin de que la expresión que daban los oradores a sus defensas no pudiera influir en su ánimo, teniendo como consecuencia que la lastima hiciera la impartición de justicia carente de equidad.

#### **En Roma**

Durante el nacimiento de este pueblo la autotutela fue el medio de hacerse respetar la violación de un derecho que a su vez tuvo una evolución que va desde la Ley del Tali3n, después la composición voluntaria hasta llegar a la impartición de justicia por conducto de la autoridad pública, fijando la reparación del da3o para la víctima y la pena para el victimario; sin embargo para que la autoridad no obre sin control los Romanos crearon procedimientos que debían reunir ciertas formalidades que daban como resultado que la justicia se impartiera sin arbitrariedades, éstas formalidades constituyeron: la Historia del

Derecho Procesal Romano, la cual comprende tres períodos.

- Las Acciones de la Ley.
- El Período Formulario.
- El Período Extraordinario.

### **Las Acciones de la Ley**

El Período de las Acciones de la Ley (Legis Acciones), es el más antiguo<sup>[8]</sup> se extiende desde los orígenes de Roma hasta la promulgación de la Ley Aebutia en los años 577 ó 583 A.C. en dicho período las instituciones jurídicas estaban impregnadas de toda la rudeza primitiva, eran 5, tenían ese nombre probablemente porque se encontraban consignadas en la Ley de las Doce Tablas, al respecto el jurisconsulto Gayo dijo; las acciones que se usaban antiguamente se llamaban acciones de la Ley porque entonces los edictos de los pretores, que más tarde introdujeron muchas acciones, no estaban en vigor, estas cinco acciones fueron las siguientes:

- La Acción Sacramenti.
- La Judicis Postulatio.

---

[8] Pallares Eduardo. Tratado de las Acciones Civiles. Edit. Porrúa, S.A. México. 1985. Pp. 9, 10 y 11.

- La *Condictio*
- La *Manus Inyectio*.
- La *Pignoris Carpio*.

Las tres primeras son medios de conocimientos y las dos últimas son medios de Ejecución.

### **La Acción Sacramenti**

En esta acción, los litigantes hacían en presencia del magistrado una especie de apuesta realizando gestos y palabras sacramentales, como consecuencia de esta apuesta las partes consignaban en manos del pontífice una suma llamada *sacramentum* la cual perdía el vencido en juicio, destinándose su monto a los gastos del culto (*ad sacra pública*), ya consignada la suma de dinero, las partes pedían al magistrado les concediese un juez, pero para obtenerlo era necesario volver ante él treinta días después debiendo garantizar las partes su regreso mediante el *VADIMONIUM* que era una promesa de que regresarían acompañando a esta promesa una caución que daba un vade que en la actualidad es equiparable a un fiador, al regresar las partes ante el magistrado, les era concedido el juez, conviniendo acudir ante él al tercer día. Este juzgador sólo podía apreciar si el

*sacramentum* era justo o no sin consideración a las obligaciones respectivas de las partes, además era imposible si estaba oculto el objeto reclamado.

### **La Judicis Postulatio**

Con motivo de que en la acción *sacramenti* prácticamente se observaba exclusivamente la valoración del *Sacramentum* hubo la necesidad de crear la acción *Judicis Postulatio*, ya que a través de ella las partes podían solicitar se les asignase un juez sin el depósito previo del *sacramentum*, teniendo además por objeto pedir el cumplimiento de obligaciones de cosas indeterminadas, se desconoce a ciencia cierta el procedimiento que se seguía en esta acción, se sabe al respecto que se iniciaba con la petición de las partes ante el magistrado, respecto a la asignación de un juez en los siguientes términos: *Te Praetor iudicem arbitrum ve postulo uti des* (Te pido pretor, que des un juez o un árbitro que se expresaba a través de estas iniciales T.PR.I.A.V.P.V.D. según Valerio Probo<sup>[9]</sup>.

### **La Condictio**

Esta acción surgió por virtud de la Ley Silia (250 A.C.) para hacer efectivos los créditos de dinero y a su vez por la Ley Calpurnia (200 A.C.) para hacer efectivos los

---

[9] Scialoja Vittorio. Procedimiento Civil. Buenos Aires, Argentina. 1954. Pág. 141.



créditos de cosas determinadas, al respecto Gayo nos dice: "*Esta Acción se llamaba con toda propiedad Conflicto, ya que a través de ella el actor intimidaba a su adversario a efecto de que en los treinta días siguientes se presentara en su compañía a tomar un juez*"<sup>[10]</sup>.

El Drama que se escenificaba en la *Legis actio per Conditionem* en sus dos primeras fases, era muy similar al de la *actio sacramento in personam* y al de la *actio per judicis postulationem*, Scialoja nos indica al respecto, la diferencia entre las tres acciones empleadas es la tutela de las relaciones de crédito que se concentraba en la tercera fase de la que precisamente cada acción tomaba su nombre, si la tercera fase contenía la invitación a la apuesta se tenía la *Legis actio sacramentum*, si contenía la demanda de un juez se tenía la *Legis actio per judicis postulationem*, si contenía la citación para dentro de treinta días se tenía la *Legis actio per conditionem*.

Los dos procedimientos restantes son medios de ejecución de los juicios aplicándose el de la *manus Injectio* directamente en la persona del condenado, que a su vez es ajena a sus bienes del mismo, salvo por vía de consecuencia. Esta acción se daba así contra el condenado a una pena pecuniaria y contra el deudor que ha reconocido su deuda *in lute*.

---

[10] Sara Bialostoski y Bravo González A. Compendio de Derecho Romano. Edit. Pax. México. 1973. Pp. 162 - 163.

Recibió el nombre de *Pignoris Carpio*, el acto por el cual el acreedor tomaba pronunciando fórmulas sacramentales, bienes del deudor a título de prenda para que fuese válida debía estar autorizada por la costumbre o por la Ley y en razón de un interés militar sagrado o fiscal. Los principios que regían el procedimiento romano durante el período de las acciones de la Ley, puede decirse que se concretan a un extremo formalismo, así como una solemnidad excesiva nos parece bastante explícita la impresión que de este tema nos reseña Ortolán, cuando dice: *En el período de las acciones de la Ley, las instituciones jurídicas fueron aristocráticas, quiritarias y estaban impregnadas de toda la rudeza primitiva; tenían el sello sacerdotal y patricio con sus símbolos en acciones, palabras y gestos que nos revelan las existencia de una edad primitiva de una civilización uniforme y material*<sup>[11]</sup>.

Acerca de la causa de su término nos refiere que debido a que su carácter sacerdotal simbólico y aristocrático fue poniéndose más y más en desacuerdo con las costumbres y con la constitución social, además que sobre todo era para la plebe romana el vestigio de una servidumbre contra lo que tanto se había luchado.

Los Procedimientos Romanos regidos por las Acciones de la Ley estuvieron vigentes por espacio de cinco siglos, hasta que el rigor que las caracterizaba fue

---

[11] Pallares Eduardo. Tratado de las Acciones Civiles. Editorial Porrúa, S.A. Quinta Edición. México. 1985. Pp. 10, 11 y 12.

sufriendo modificaciones graduales empezando por sustituirse a las citadas acciones, frecuentemente y de hecho con una práctica emitida de las formas seguidas respecto de los peregrinos hasta que en el siglo VI, de Roma se suprimieron por la Ley Aebutia y las dos Leyes Julias siendo usadas después sólo en casos especiales.

Cabe señalar que este período aunque no de una manera exacta coincide con la primera etapa histórica del pueblo romano que es la Monarquía y los dos períodos posteriores a su vez vienen a coincidir con la República y el Imperio.

### **El Período Formulario**

Este período surgió en la llamada época de oro del Derecho Civil Romano, teniendo como fundamento la figura de la fórmula.

Entendiendo por fórmula, al acto por el cual el Magistrado nombra el juez y fija los elementos sobre los cuales éste deberá fundar su juicio dándole a la vez el mandato más o menos determinado para la condenación eventual o para la absolución en la Sentencia. 'Según Gayo la fórmula estaba constituida de la siguiente manera: la formaban *la demonstratio*, *la intentio*, *la adjudicatio* y *la condenatio*.

<i>La Demonstratio:</i>	La constituía la exposición de los hechos que motivaban el litigio.
<i>La Intentio:</i>	Era la pretensión del actor respecto del juicio que intentaba.
<i>La Adjudicatio:</i>	Era la facultad concedida al juez o al jurado para que pudiese adjudicar el bien litigioso a alguna de las partes.
<i>La Condenatio:</i>	Era la potestad que tenían los jueces para condenar al vencido en el juicio.

Otra cualidad de dichas fórmulas era que no todas contenían estas cuatro partes en las acciones *In Factum*, la intención y la demostración formaban una sola parte. A este respecto, Gayo nos dice: "*La Intención y la demostración son independientes, pero la demostración, la adjudicación y la Condenación, no se encuentran jamás solas*".

Otra de las características en este procedimiento fue que los litigantes ya no tenían que ejecutar gestos solemnes ni pronunciar palabras sacramentales; además

de que mediante la fórmula el magistrado fijaba las cuestiones que debía resolver el juez señalando los principios de derecho aplicables. Un principio de suma importancia que rigió al procedimiento en el período formulario es que con lenguaje moderno que podríamos llamar de contradicción o defensa y que consistía en que una vez que el actor exponía ante el magistrado su problema, recalando en el objeto y fundamentos de su demanda, elegía y pedía la fórmula de la acción de que quería hacer uso, él demandado tenía la facultad de impugnar su admisión por medios deducibles que habrían de demostrar que estaban fundados en el derecho y no en los hechos, ya que la apreciación de éstos correspondía al juez. Asimismo, podía el demandado pedir que se insertara en la fórmula las excepciones que se derivaban de los hechos de la causa. El actor podía realizar lo que en la *Doctrina moderna* se conoce como *Dúplica*, contradiciendo los medios invocados por el demandado y éste podía a su vez replicar.

Es también de importancia, al hecho de que si la acción o las excepciones no estaban fundadas en derecho el pretor no las admitía.

Asimismo, encontramos la figura de la reversión a la *La Vía Ejecutiva* que surgía cuando los hechos en que se basaba una demanda fundada en Derecho eran reconocidos por el demandado. Concluiríamos diciendo que la *Acción Judicial* en

este período consistió en dos cosas, una la fórmula que redactaba el magistrado a efecto de que el demandante realizara la instancia ante el juez, haciendo posible que el juez conociera del litigio y dictara una sentencia. La segunda, consistía en el derecho contenido implícitamente en la fórmula y que era otorgado al demandante.

En este período las frases sacramentales y pantomimas fueron sustituidas por un lenguaje vulgar, existían en este período dos sistemas: El primero, ante el magistrado (pretor) al que se le denominaba *in Jure* el segundo, ante el juez o jurado al que se le llamaba "*in judicium*"; en el primero de ellos el demandante exponía sus pretensiones y el reo su contestación, pidiendo ambos el otorgamiento de un juez o de un jurado que decidiera el juicio, concluyendo cuando el magistrado entregaba al actor la fórmula (acción) siendo de importancia destacar que los pretores siempre consideraron de mucha importancia la redacción de la fórmula, consultando si era necesario a los más notables jurisconsultos si era preciso pretendiendo siempre redactarla lo más apegada a la justicia.

La fórmulas se inscribían en un libro llamado "Albún" que a su vez eran publicadas para el dominio público. Es en este período donde fue conocida la Definición de Celso que decía: "*La acción es el Derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido*" (*ius persecuendi in judicio quod, sibi debeatur*); Ortolán dice a este respecto, "*La acción, en este período significa: El Derecho concedido por el*

*magistrado al actor, para perseguir delante de un juez lo que le es debido... o bien, se designa con esa palabra a la fórmula que se entregaba al actor y por la cual se confería ese Derecho, es en sí una figura del Derecho que dentro del lenguaje jurídico toma el efecto por la causa, se aplica a la fórmula y como consecuencia se daba a la acción el nombre de *judicium*, es decir de la instancia judicial que organiza."*

En este período era frecuente usar como sinónimos de la Acción las palabras: *actio*, *fórmula* y *judicium*. El Derecho de perseguir en juicio a una persona no existía como en la actualidad por Ministerio de Ley, sino que para que fuera procedente el pretor debía entregar al demandante la fórmula.

## **El Período Extraordinario**

Se atribuyen a Dioclesiano (294 A.C.) las reformas al Proceso Civil Romano que predominó en el período formulario, estas reformas fueron publicadas a través de una Constitución. Este período estuvo regido por los siguientes principios: el de Inmediación, Bilateralidad de la Acción y el de Buena Fé.

De Inmediación: Se refería a que el juicio se seguía ante el juez que conocía originalmente de la controversia.

De Bilateralidad: El Derecho de excepcionarse que tenía el demandado, tenía igual naturaleza al de la acción.

El de Buena Fé: Se refería a que el litigante temerario o mal intencionado debía pagar en favor de su contrario los gastos del juicio.

La palabra Excepción también cambió de significado en esta época, ya que vino a constituir un medio de defensa otorgado al demandado por virtud del cual rechazaba la reclamación dirigida contra él, que a su vez al igual que la acción se hacía valer por Derecho Propio teniendo como resultado que el procedimiento judicial basado en frases sacramentales, gestos y fórmulas fue suprimido por un método sencillo que tendrá a lograr la unidad y centralización del poder judicial.

En este período la palabra Acción pierde evidentemente el significado especial que tenía en el período formulario.

En el período extraordinario, las Institutas de Justiniano reprodujeron la definición de Celso, respecto a la Acción que la conceptuaba en "*El Derecho de Perseguir en Juicio lo que nos es debido*", agregándole en este período lo siguiente:



*“O lo que nos pertenece”* para que comprendiera tanto los derechos reales como los personales, teniendo como resultado un significado diverso al que se le dio en el período que le antecedió, ya que en la época de Justiniano, la acción deja de ser una fórmula para convertirse en el Derecho Dimanado de la Ley. No como lo era antes que dependía de la potestad del Magistrado, esto es el demandante ya tenía el Derecho que la Ley le concedía para obtener en juicio lo que el demandado le debía o la restitución de la cosa que le pertenece.

En este período la acción se inicia mediante la actividad de un particular que tiene el carácter de demandante que insta a la autoridad a efecto de que por su conducto obtenga las prestaciones que se le adeudan a diferencia del período en el que la acción era un acto emanado de la autoridad pública un verdadero decreto interlocutorio pronunciado por un magistrado.

En este período la prefensión es un acto bien o mal fundado pero de naturaleza puramente privado. Al respecto Ortolán afirmó que en tiempo de Justiniano, la acción era el Derecho de dirigirse directamente a la autoridad competente para exigir lo que no es debido o lo que nos pertenece.

## EVOLUCION HISTORICA DEL DERECHO PROCESAL EN MEXICO

### En la Epoca Prehispánica

Con la llegada del ejército español a tierras aztecas, al ser portadores los soldados españoles de destrucción en el afán de conquista, se perdió todo vestigio de lo que conformaba el ámbito judicial del pueblo mexicana, fue el Virrey Don Antonio de Mendoza quien ordenó se hiciera un documento en el cual se narrara al Rey Carlos Quinto de España las costumbres y actividades que desempeñaban los aztecas, así como los aspectos político, social, económico, cultural y militar.

En dicho documento destacaban las costumbres desarrolladas en la vida familiar que estaban representadas a través de dibujos y gráficas, así como éstas eran acompañadas de los relatos correspondientes, a este documento se le llamó CODICE MENDOCINO<sup>[12]</sup> documento histórico del cual hemos de valernos para conocer cómo se desarrollaba el Proceso Judicial entre los aztecas, en él encontramos representada la actividad jurisdiccional de nuestros ancestros a través de gráficas estructuradas por jeroglíficos. A través de la interpretación de dicho

---

[12] Mendieta y Núñez Lucio. Historia de la Facultad de Derecho. Editorial Porrúa, S.A. México. 1956. Págs. 122 y 123.

Código, sabemos que existía un bien organizado poder judicial en el que los jueces eran instruidos en el Calmecac al cual sólo ingresaban los nobles, además de que debían poseer grandes cualidades y ser respetables.

La educación para las actividades judiciales era teórico-práctica, la primera de éstas se les impartía en el lugar denominado Calmecac, la práctica la aprendían en los tribunales a donde se les enviaba a observar cerca de los jueces como se administraba justicia.

En la práctica aprendían como instruir un Proceso reuniendo los medios de prueba necesarios estableciendo su valor y aplicando la Ley, según las circunstancias del caso, entendiendo esto último cómo la Sentencia. Nos señala Fray Bartolomé de las Casas<sup>[13]</sup> "los jueces y magistrados mucho se cuidaban de incurrir en situaciones ilícitas por ejemplo, recibir cohecho, ya que esto se pagaba con la pena de muerte.

Los encargados de la impartición de justicia, ninguna cosa recibían ni presentes, ni dádivas, si se sabía que algún juez recibía presentes o dones y por ellos o por algún otro respecto, hacia contra justicia en perjuicio de alguna de las partes o

---

[13] Los Indios de México y de la Nueva España, Fondo de Cultura Económica. México. 1971. Págs. 130 y 131.

si se sabía que alguna vez se emborrachaba, los otros jueces lo reprendían hasta tres veces si no se enmendaba lo trasquilaban y lo privaban del oficio.

Según Antonio de Solís para probar la honestidad de los jueces, los monarcas Aztecas ofrecían a través de sus ayudantes más cercanos regalos y otras dádivas y aquel que se atrevía a faltar a sus obligaciones respecto de su investidura, moría por ello<sup>[14]</sup> con motivo de esta pena los senadores y jueces estaban muy recatados y avisados en su oficio. A decir de Fray Bernardino de Sahagún<sup>[15]</sup> para la impartición de justicia se reclutaba a los hombres idóneos “elegían para jueces, personas nobles y ricas, ejercitadas en las cosas de la guerra y experimentadas en los trabajos de las conquistas, de buenas costumbres que hubieran sido criados en los monasterios del Calmecac, prudentes y sabios y a su vez criados en el palacio, mirabase que no fueran borrachos, ni amigos de tomar dádivas, ni aceptadores de personas, ni apasionados encargabales mucho el señor que hicieren justicia.

El Procedimiento Judicial del Pueblo Azteca era siempre oral, formándose expedientes de las causas, señala Fray Bartolomé de las Casas”. En cada sala

---

[14] Historia de la Conquista de México. Editorial Porrúa, S.A. México 1973 Pág. 178.

[15] Historia General de las Cosas de la Nueva España. Editorial Porrúa, S A. México. 1975. Págs. 555 y 556.

estaba con cada juez un escribano o mejor dicho un pintor, ya que éste servía de escribano diestro que con sus pinturas o caracteres, las personas que trataban pleitos y las causas y demandas, testigos lo que se concluía y se sentenciaba ponía por memoria”.

Una prueba que se sabe por lo historiadores mencionados existía en el Proceso Judicial del Pueblo Azteca era la testimonial de trascendencia vital en el Proceso, al respecto Sahagún nos dice “Los jueces buscaban a los testigos para que afirmasen lo que habían visto u oído, apercibiéndolos con un castigo terrible al que incurriere en falsedad de declaraciones”<sup>[16]</sup>. cabe aclarar que la confesión era decisiva, existía una bien definida organización judicial, la diversidad de grados en los magistrados servía al buen orden y existía la pena capital contra los prevaricadores de la justicia. Para preveer el retardamiento en los juicios, el soberano se reunía con los jueces y magistrados cada veinte y ochenta días respectivamente, a través de esto el Soberano hacía que la inocencia tuviera más recursos y que el aporte del juicio hiciera más respetable a la justicia<sup>[17]</sup>.

---

[16] Clavijero Francisco Javier. *Historia de la Conquista de México*. Editorial Porrúa México. 1975.

[17] Arellano García Carlos. *Derecho Procesal Civil*. Editorial Porrúa, S.A. Segunda Edición. México. 1987. Págs. 52 y 53.

Existía un funcionario que dada la naturaleza de sus funciones, lo podemos señalar como la máxima autoridad judicial a éste se le denominaba Cihuacóatl cuya personalidad ha sido debatida por los historiadores, ya que algunos mencionan que tenía la misma autoridad que el rey y su consentimiento de este funcionario era necesario para que el soberano pudiera hacer todo lo necesario en su gobierno. Al tener este personaje grandes atribuciones judiciales los cronistas lo han designado como "Justicia Mayor"<sup>[18]</sup> este funcionario según Toribio Esquivel Obregón conocía de causas civiles y criminales las primeras eran inapelables, las segundas admitían apelación que debía presentarse ante él.

Debido a la devastación de que fue objeto Tenochtitlán se perdieron fuentes importantes donde con certeza pudiéramos encontrar definida la secuela procesal que seguían en sus juicios los Aztecas; sin embargo a todas luces es evidente que tenían un bien organizado Poder Judicial, que en sus juicios se contaba como a la prueba principal a la testimonial aunada a la documental que se conformaba de las pinturas que realizaba el escribano diestro. Lo que si podemos expresar es que en ninguna parte del Códice Mendocino existe observancia alguna que denote que en el Proceso Civil haya existido como etapa previa a la sentencia la etapa de alegatos que constituye la naturaleza del presente trabajo.

---

[18] México a Través de los Siglos. Editorial Cumbre. México. 1962. Tomo I. Págs 638.

## En la Epoca Colonial

La conquista de los españoles trajo consigo un cambio fundamental en el régimen político, económico, jurídico y cultural no sólo del pueblo mexicana, sino de todos los pueblos que se aliaron con Hernán Cortés, así como de los pueblos sometidos por el ejército Azteca.

Durante el siglo XVI se conservaron muchas de las instituciones establecidas, tanto por conveniencia derivada de la colonización como por haberseles encontrado eficaces e insustituibles. Las Leyes de Indias establecieron una evidente protección para el individuo indígena al que consideraron un menor de edad para todos los efectos jurídicos, podemos considerar que existieron dos legislaciones durante la época de la Colonia, una para los españoles y causas en que algún español se encontrara coludido o en el caso de que algún indígena atacara las propiedades o la vida de la población hispánica.

Y la otra parte para juzgar cuestiones de indígenas o causas en que éstos sufrieran menoscabo en sus intereses o en su persona, siendo de importancia aclarar que en la mayoría de los casos las autoridades del virreinato hicieron caso omiso de esta última legislación, aplicando la legislación española en detrimento de la población indígena.

Existía para evitar todas estas arbitrariedades el Real Consejo de Indias, sin embargo no dio solución a dichas vejaciones, esta institución durante la Colonia fue el Supremo Tribunal, además de actuar como consultor del monarca español en todo lo concerniente a todas las colonias conquistadas, también tuvo funciones políticas como por ejemplo, la elección de virreyes, capitanes, generales, gobernadores, Intendentes, alcaldes y corregidores, a su vez también intervenía en la elección de los miembros que conformaban las diversas audiencias<sup>[19]</sup>.

Para que los integrantes del Real Consejo de Indias administrasen con justicia y equidad actuando en todo momento con independencia de intereses, amistades, parentesco o cualquier otra situación que estuviera relacionada con el lugar en el que se ejercían sus funciones a los magistrados se les prohibía dar o recibir dinero prestado, poseer tierras, recibir dádivas, etc., como lo ordenaba el Libro 2o. Título Dieciséis de la Recopilación de Indias.

Este tribunal lo formaban un presidente que estaba representado por el Virrey, además de ocho oidores que formaban Salas para los juicios civiles y criminales sus resoluciones no admitían apelación excepto en casos especiales.

---

[19] Becerra Bautista José. El Proceso Civil en México. Editorial Porrúa, S.A. Décima Edición. México. 1982. Págs. 255 y 256.



La única autoridad absoluta lo era el Virrey, quien a su cargo unía el de Presidente de la Real Audiencia, Gobernador General Intendente de la Real Hacienda y Administrador del regio patronato de Indias, es decir en una sola persona se encontraban reunidos todos los poderes Coloniales que a su vez sólo rendía cuentas de sus actos al Rey de España.

Otros tribunales existieron durante el período de la Nueva España además del Real Consejo de Indias, también existieron:

- a) El Tribunal de la Santa Fé.
- b) El Tribunal de Minería.
- c) El Tribunal Militar de la Acordada.

El primero de ellos que se le conocía comúnmente como el Tribunal de la Santa Inquisición, comprendía todos los asuntos relacionados con la religión Católica, sus juicios eran realmente estrictos, el Proceso de éstos estaba constituido por el cumulo de pruebas aportadas por la autoridad, así como por las aportadas por el sacrilego, los juicios se iniciaban generalmente con acusaciones anónimas referentes a actos de hechicería y herejía considerados contrarios a la religión Católica, los cuales se le imputaban a la persona a la que se denunciaba antes de ser escuchado como es de

toda justicia, el presunto sacrilegio era aprehendido por las autoridades y encerrado en las cárceles del Santo Oficio, en el cual a base de tormentos y torturas se les obligaba a jurar en nombre de Dios que renunciaba a sus creencias idólatras, podemos considerar que en su generalidad, el reo no tenía la posibilidad de aportar pruebas en el juicio que le permitieron demostrar su inocencia, toda vez que lo doloroso de los tormentos hacia que desde su aprehensión se declarasen culpables par evitar sufrir toda clase de vejaciones sin importarles que la resolución pudiera tener alcances hasta de la pena de muerte.

El segundo de los señalados se creó a mediados del Siglo XVIII por el Rey Carlos III para dirimir toda clase de controversias surgidas entre los mineros, por lo que se le denominó El Tribunal de Minería.

Respecto al último de los tribunales nombrados, éste castigaba a los soldados que incurrieran en delitos graves, ya que estos ilícitos conculcaban las normas que regulaban la disciplina militar y por consiguiente hacían que el pueblo no respetara a la milicia, este mismo tribunal también juzgaba a los salteadores de caminos.

Todos estos tribunales por su naturaleza especial para conocer de los delitos que eran competentes en virtud de su materia desaparecieron en el momento en que México se hizo independiente.

Retomando lo relacionado con el Consejo de Indias el Proceso que se seguía en los juicios consistía en que la Audiencia<sup>[20]</sup> oía los alegatos de las partes y resolvía la controversia, sus fallos debían estar basados en las Leyes de Indias y en forma supletoria en las Leyes de Castilla, según lo dispuso Carlos Quinto de España desde 1530.

Los Abogados que litigaban en la Audiencia, regían su conducta por lo dispuesto en el título veinticuatro del libro segundo de la recopilación de la Leyes de Indias. Para poder ejercer la Abogacía, los aspirantes debían previamente acreditar cuatro años de pasantía y haber sido examinados por la propia Audiencia, todos los escritos presentados ante la Audiencia debían ser firmados por el Abogado so pena de desecharlos, respecto a los honorarios que cobraban, éstos estaban fijados por aranceles establecidos por la propia Audiencia.

## **En la Epoca Independiente**

Durante la consumación de la Independencia de México siguió la Legislación Española y paulatinamente fue sustituida por legislación emanada del pueblo

---

[20] Flores Gómez González y Carvajal Moreno Gustavo. Nociones de Derecho Positivo Mexicano. Décimo Octava Edición. Editorial Porrúa, S.A. México. 1979. Pp. 16, 17 y 18.

mexicano, hasta que se llegó al grado de que las normas hispanas sólo se aplicaban en forma supletoria siempre y cuando no se opusieran a la Legislación Nacional.

El 23 de mayo de 1837, el gobierno mexicano expidió una Ley que ordenaba se siguiera aplicando la Legislación Española en lo que no se opusiera a la nacional. Fue el 4 de mayo de 1857, cuando el Presidente Ignacio Comonfort expidió la primera Ley Procesal que estaba formada por 181 Artículos que se referían a la organización de los Tribunales, Normas de Derecho Procesal, Civil y algunas disposiciones de Derecho Procesal Penal, fundamentada en el Derecho Procesal Español. Siendo hasta el 9 de diciembre de 1871 cuando se expidió el Código de Procedimientos Civiles el que por su contenido puede considerarse un Código completo. Sin embargo, sólo tuvo vigencia hasta el 15 de septiembre de 1880 que se expidió un nuevo código, pero en estos dos últimos aún encontramos influencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855.

Es hasta el Código del 15 de mayo de 1884 cuando ya encontramos legislación netamente mexicana.

Respecto a la Legislación Federal estuvieron en vigor los códigos del 6 de octubre de 1897 y del 26 de diciembre de 1908, siendo hasta el 31 de diciembre de 1942 cuando se expide el actual Código Federal de Procedimientos Civiles entrando en vigor el 27 de marzo de 1943.

## **CAPITULO SEGUNDO**

### **FORMALIDADES DEL PROCESO CONTENIDAS EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL**

## **CAPITULO SEGUNDO**

# **FORMALIDADES DEL PROCESO CONTENIDAS EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA DISTRITO FEDERAL**

### **LAS FASES PROCESALES**

En el Proceso existen una pluralidad de actos jurídicos, de hechos jurídicos y de actos materiales, siendo de importancia destacar como define el Diccionario de la Real Academia Española a esta palabra<sup>[21]</sup>, Proceso: *Conjunto de Actos Regulados por la Ley y realizados con la finalidad de alcanzar la aplicación judicial del Derecho Objetivo y la satisfacción consiguiente del interés legalmente tutelado en el caso*

---

[21] De Piña Vara Rafael. Diccionario de derecho. Editorial Porrúa, S.A., Décima Segunda Edición. México. 1984. Pág. 400.

*concreto mediante una decisión del juez competente.* El conjunto de Actos y De hechos constituye el Proceso Jurídico que es nuestro tema de estudio, según el grado de evolución en que se encuentre el Proceso puede establecerse en qué Fase, Etapa o Período se encuentra éste, entendiéndose por Fase<sup>[22]</sup> *“Cada uno de los diversos aspectos que presenta un fenómeno natural o una cosa, doctrina, etc., por lo que durante su desarrollo el Proceso presenta diferentes aspectos que constituyen las Fases de éste”.*

### **Clasificación de las Fases Procesales**

El Proceso Civil en el Distrito Federal se encuentra dividido en las siguientes fases procesales:

- a) Fase Postulatoria.
- b) Fase Probatoria.
- c) Fase Conclusiva.
- d) Fase Resolutiva.

---

[22] Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Décima Novena Edición. Editorial Calpe, S.A. Madrid, España. 1970. Pp. 614.

A continuación estableceremos las características propias de cada fase procesal.

## **FASE POSTULATORIA**

Es aquella en la que las partes invocan ante el juez los hechos y normas jurídicas que les favorecen a través de la demanda, entendiéndose por Parte como: *Aquella persona que exige del órgano jurisdiccional la aplicación de una norma sustantiva a un caso concreto en interés propio o ajeno*<sup>[23]</sup>.

En esta Etapa se puede anticipar el ofrecimiento de pruebas cuando el Derecho Vigente ordena que los documentos fundatorios de la demanda se acompañan a ésta o cuando la Ley ordena la exhibición de los documentos que avalen la procedencia de la acción intentada.

Dentro de esta Fase también se contempla el acuerdo que recae a la presentación de la demanda, al que se le denomina auto-admisorio, también dentro

---

[23] Becerra Bautista José. El Proceso Civil en México. Editorial Porrúa, S. A. Décima Edición. México. 1982. Pág. 19.



de esta fase se contempla el emplazamiento del demandado, el auto recaído a la contestación de demanda siendo de importancia aclarar que también forma parte de la fase que nos ocupa la reconvencción y su contestación.

A efecto de introducirnos en la fase postulatoria iniciaremos por decir el concepto de demanda.

### **Concepto de Demanda:**

Es el acto jurídico procesal, verbal o escrito por el cual una persona física o moral denominada actor, acude ante un órgano jurisdiccional a ejercitar su derecho de acción en contra de otra persona, física o moral denominada demandada o reo con el objeto de reclamar las prestaciones que se anuncian<sup>[24]</sup>

Otro concepto de Demanda nos lo proporciona el distinguido Procesalista José Ovalle Favela quien la define como: *"El Acto Procesal por el cual una Persona, que se Constituye por el Mismo en Parte Actora o Demandante, Fórmula su Pretensión Ante el Organo Jurisdiccional e Inicia un Proceso"*.

---

[24] Arellano García Carlos. Derecho Procesal Civil. Editorial Porrúa, S.A Segunda Edición. México. 1987. Pág. 121 y 122.

Y por último el concepto propuesto por el Tratadista Cipriano Gómez Lara, en su obra *"Derecho Procesal Civil"* quien la define como: *"El Primer Acto de Ejercicio de la Acción, Mediante el cual, el Pretensor Acude Ante los Tribunales Persiguiendo que se Satisfaga su Pretensión"*.

## **Forma y Contenido de la Demanda**

Respecto a la forma de la demanda la Legislación Procesal del Distrito Federal, observa el criterio ecléctico, es decir prevee la posibilidad de presentar la demanda verbalmente o por escrito, el Artículo 255 de dicho ordenamiento, establece que toda contienda judicial principiará por demanda en la cual se expresarán: nombre del actor y demandado, sus domicilios, lo que se reclama, los hechos en que el actor funda su petición, los fundamentos de derecho y el valor de lo demandado, en tal virtud encontraremos que dicho numeral nos impone la necesidad de presentar por escrito la demanda, sin embargo el Artículo 943 del mismo Código da la oportunidad al agraviado de presentarla verbalmente o por escrito como a continuación se aprecia:

ARTICULO 943.- Podrá acudirse al juez de lo familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el Artículo

anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trata. Con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten, se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del término de nueve días. En tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva. Tratándose de alimentos, ya sea provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley, el juez fijará a petición del acreedor sin audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria una pensión alimenticia provisional mientras se resuelva el juicio.

Será optativo para las partes acudir asesoradas y en este supuesto los asesores necesariamente deberán ser Licenciados en Derecho con Cédula Profesional. En caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, se solicitarán de inmediato los servicios de un defensor de oficio, el que deberá acudir desde luego a enterarse del asunto, disfrutando de un término que no podrá exceder de tres días para hacerlo, por cuya razón se diferirá la audiencia en un término igual.

Es así como encontramos dentro de la Legislación del Distrito Federal ambas formas de presentar una demanda, la forma o manera de interponerla validamente

consiste en acudir ante el juez competente para que nos sea aceptada ésta. Cabe destacar que para el caso de que se presente por escrito, deberá presentarse ante la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

### **Efectos Derivados de la Interposición de la Demanda**

La consecuencia inmediata de la presentación de la demanda ya sea oral o escrita la encontramos contenida en el Artículo 258 del Código Adjetivo de la Materia Civil, que a la letra dice:

ARTICULO 258.- Los efectos de la presentación de la demanda son: interrumpir la prescripción si no la está por otros medios, señalar el principio de la instancia y determinar el valor de las prestaciones exigidas cuando no pueda referirse a otro tiempo.

Respecto al primer supuesto, se refiere al acto en virtud del cual a partir de la presentación de la demanda el transcurso del tiempo en virtud del cual se adquieren o pierden derechos u obligaciones se ve interrumpido; por ejemplo en el caso de la prescripción positiva que la Ley establece es de cinco años de buena fé, a pesar de

que el poseedor lleve cuatro años detectando la posesión de un inmueble con el hecho de demandarle la reivindicación por parte de su legítimo propietario, la acción prescriptiva se ve obstaculizada impidiendo en detrimento del poseedor la adquisición de un Derecho Real. Respecto al segundo aspecto enunciado en el Artículo supracitado, éste se constituye a partir de que, al presentar la demanda el actor obliga al juzgador a iniciar el desarrollo del Proceso en el que éste desempeñará la función jurisdiccional.

El tercer efecto se da a partir de que, con la presentación de la demanda se determina el valor de las prestaciones exigidas, toda vez que existen prestaciones cuyo valor no se determina con precisión en el momento de demandarse pero que son determinables en ejecución de sentencia.

## **El Emplazamiento y sus Efectos**

El Emplazamiento es un acto procesal de vital importancia para el desarrollo del Proceso, constituye el requisito *sine quanon*, para la tramitación legítima de un juicio, toda vez que genera el nacimiento de éste. Prepara la integración de la *litis* teniendo por objeto ofrecer al demandado la oportunidad de desvirtuar el Derecho hecho valer

por el demandante o excepcionarse en contra de la petición formulada.

Este acto procesal constituye una seguridad formal y material para el demandado, esto es las formalidades del procedimiento se subliman hasta el punto de establecer una seguridad casi de fondo que no debe quedar al arbitrio del juez que *conoce del juicio ni a merced del que ejercita la acción*. Constituye un patrón de legalidad insoslayable, por lo que antes de acordar la contestación de demanda o de establecer el carácter de rebelde imputable al demandado que no dio contestación en el término de Ley, siempre de oficio el juzgador examinará escrupulosamente y bajo su más estricta responsabilidad si las citaciones y notificaciones precedentes están hechas al demandado en la forma legal, si encontrara vicios en dicho acto, mandará a reponerlo e impondrá una corrección disciplinaria al notificador cuando aparezca responsable, lo cual se encuentra previsto por el Artículo 271 del Código en comento.

La Legislación del Distrito Federal establece los efectos del emplazamiento en el Artículo 259 que a letra dice:

ARTICULO 259 - Los efectos del Emplazamiento son:

- I. Prevenir el juicio en favor del juez que lo hace.

- II. Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el juez que lo emplazó siendo competente al tiempo de la citación, aunque después deje de hacerlo con relación al demandado porque éste cambie de domicilio o por otro motivo legal.
- III. Obligar al demandado a contestar ante el juez que lo emplazó salvo siempre el Derecho de provocar la incompetencia.
- IV. Producir todas las consecuencias de la interpelación judicial si por otros medios no se hubiere constituido ya en mora al obligado.
- V. *Originar el interés legal en las obligaciones pecuniarias sin causa de réditos.*

La consecuencia inmediata del emplazamiento se da en dos supuestos:

- a) *Que sea contestada la Demanda.*
- b) *Que no se conteste.*

En el primero de los casos el demandado podrá aceptar o negar los hechos que se le imputan, y en el segundo al no dar contestación el Demandado incurre en

contumacia, afrontando las consecuencias legales de su omisión.

La Curia Filípica Mexicana en el siglo pasado definía a la Contestación de Demanda como: *"La Respuesta Acertiva que da el reo a la demanda del actor. Es el fundamento del juicio esencial y preciso aunque sea en causa sumaria que las partes no pueden omitirla. Puede hacerse expresa y tácitamente en el primer caso se da cuando el reo comparece por sí o por su procurador con poder bastante y responde la demanda, confesándola o negándola y tácitamente cuando por su contumacia o rebeldía se declara por contestada, conforme a lo que ordena la Ley"*<sup>[25]</sup>.

Una vez contestada la demanda y en su caso la reconvención, el juez señalará día y hora para que tenga verificativo una Audiencia Conciliatoria como lo prevee el Artículo 272-A del Código Adjetivo Civil para el Distrito Federal o en su caso mandará recibir el pleito a prueba. Los efectos de dicha audiencia se traducen en dos posibilidades, una que el juicio se termine a través de convenio celebrado entre las partes y que tendrá fuerza de cosa juzgada y la otra que el juez proceda a la depuración del juicio examinando la legitimación de las partes con el fin de regularizar el procedimiento.

---

[25] Rodríguez de San Miguel Juan, Curia Filípica Mexicana. 1850. Editorial Porrúa, S.A. México. Pág. 178.



## **FASE PROBATORIA**

Es aquella en la que las partes aportan al juzgador los medios de prueba en los que funden su acción o sus excepciones con la pretensión inmediata de llegar al ánimo de éste para que dicte una resolución favorable a sus intereses.

### **Concepto de Prueba Procesal**

Es el conjunto de conocimientos que se aportan en el Proceso y tienden a la demostración de los hechos o derechos aducidos por las partes con sujeción a las normas jurídicas vigentes.

### **Principios que Rigen la Prueba Procesal**

Para el Mtro. Eduardo Pallares, la prueba en general está regulada por una serie de principios, los cuales en su obra titulada Derecho Procesal Civil expone de la siguiente manera:

1. El Juez no debe juzgar por el conocimiento extraprocesal que tenga de los hechos controvertidos, sino únicamente por el que se desprenda de las constancias de autos.
2. En principio, las pruebas deben ser producidas por las partes pero el Código actual da amplias facultades al juez para producirlas.
3. Sólo los hechos están sujetos a pruebas, el Derecho únicamente lo está cuando se trata de Derecho Extranjero de la costumbre jurídica y de la jurisprudencia.
4. Las pruebas deben ser rendidas en debate contradictorio o por lo menos dando oportunidad a las dos partes para producirlas y objetar las de la contraria. De no ser así, son ineficaces.
5. No deben admitirse las siguientes pruebas:
  - a. Las impertinentes.
  - b. Las contrarias al Derecho.
  - c. Las inmorales.

- d. Las que se refieren a hechos imposibles o notorios.
  - e. Las que conciernen a hechos cuya existencia o inexistencia no está controvertida en el juicio.
  - f. Las Contrarias a la dignidad del hombre o al respeto que merece la persona humana.
  - g. Aquellas sobre las cuales haya cosa juzgada.
- 
- 6. Es Regla General que las pruebas sólo pueden ser producidas por las partes durante el término de pruebas, pero esta regla tiene excepciones.
  - 7. Las pruebas rendidas en un juicio pueden hacerse valer en otro diverso cuando en el primero ha sido oída la parte contra la cual se hacen valer.
  - 8. Las máximas de la experiencia no necesitan ser probadas.
  - 9. Se puede obligar a las partes a producir una prueba que les perjudique.
  - 10. Todas las pruebas para ser eficaces deben ser documentadas, excepto las de presunciones. Respecto de éstas lo que debe documentarse es el hecho en que se funden.

11. La enunciación de los medios de prueba que hace el Código, no implica que exista una jerarquía entre los mismos en cuanto a su valor.
12. Las pruebas rendidas en contravención a las reglas que las rigen son nulas.
13. Las Leyes que determinan cuáles son los medios de prueba y su valor probatorio pertenecen al Derecho Substantivo las que fijan los procedimientos al procesal.
14. La nueva Ley no debe desconocer los medios de prueba que otorgaba lo anterior, ni su efecto probatorio, bajo pena de violar el principio de no retroactividad.
15. La prueba es esencial al juicio cuando en éste se discuten cuestiones de hecho.
16. Las Leyes relativas a la prueba son de orden público y no pueden ser derogadas por los particulares.

## Objeto de la Prueba

Lo constituyen tanto el conjunto de hechos como el Derecho, obviamente no todos los hechos ni todo el Derecho son materia de prueba, el Procesalista Castillo Larrañaga asevera en su obra "*Instituciones de Derecho Procesal Civil*", el objeto de la prueba son los Hechos Dudosos o Controvertidos, siendo objeto de prueba en otras legislaciones, el Derecho Consuetudinario y el Extranjero. Mediante los medios de prueba las partes se proponen crear en el ánimo del juzgador, la convicción de que les asiste la razón al actor para pedir lo que reclama y al demandado respecto a la procedencia de sus excepciones. La existencia del Proceso coincide con el propósito de que dentro de él o durante su desarrollo, las partes tengan oportunidad de probar sus afirmaciones. En el Distrito Federal el Código de Procedimientos Civiles en su Artículo 284 prevé el caso de que el objeto de la prueba sean los hechos, los usos y la costumbre en que se funde el Derecho, respecto al Derecho Extranjero ya no lo tiene como materia de prueba toda vez que el Artículo 284 Bis, señala:

ARTICULO 284-Bis. - El Tribunal aplicará el Derecho Extranjero tal como lo harían los jueces del estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del Derecho Extranjero invocado.

Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance legal del Derecho Extranjero, el tribunal podrá valerse de informes oficiales al respecto, pudiendo solicitarlos al servicio exterior mexicano, o bien ordenar o admitir las diligencias probatorias que considere necesarias o que ofrezcan las partes.

El objeto de la prueba alude a lo que debe probarse, es decir lo que será materia de prueba.

Respecto de la prueba de Usos y Costumbres:

### **La Costumbre:**

Es la fuente formal del Derecho en la que aparezcan como elementos constitutivos de ella, la reiteración de una práctica y la convicción de que esta práctica reiterada es obligatoria por lo que estos hechos conducen a la creación de Leyes, en tal virtud si se invoca una costumbre requiere ser acreditada como lo provee el Artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

## **Los Usos:**

Es sinónimo de costumbre, entendiéndose como una costumbre circunscrita a un sector social más reducido; por ejemplo una fábrica, un banco, etc.

## **Términos Probatorios**

Ya contestada la demanda y en su caso la reconvención durante el desarrollo del Proceso existe un período en el que las partes pueden aportar a la autoridad que conozca del juicio, medios de conocimiento que demuestren la veracidad de sus argumentos vertidos en su escrito de demanda o contestación, a esta etapa se le denomina probatoria la cual para su mejor entendimiento lo dividiremos en cuatro períodos.

- a) Período de Ofrecimiento de Pruebas.
- b) Período de Admisión de Pruebas.
- c) Período de Preparación de Pruebas.
- d) Período de Desahogo de Pruebas.

En el Distrito Federal el Período de Ofrecimiento de Pruebas lo encontramos previsto por el Artículo 290 del Código supraindicado que a la letra dice:

ARTICULO 290.- El mismo día que se haya celebrado la audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales, si en la misma no se terminó el juicio por convenio o a más tardar al día siguiente de dicha audiencia, el Juez abrirá el juicio al período de ofrecimiento de pruebas, que es de diez días comunes que empezarán a contarse desde el día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación a todas las partes del auto que manda a abrir el juicio a prueba.

La segunda etapa es el Período de Admisión de las Pruebas Ofrecidas, consistente en que el juzgador basándose en el Artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal con la inmediata pretensión de conocer la verdad de los hechos aducidos por las partes con la única limitación que le impone la Ley de que las pruebas no sean prohibidas ni sean contrarias a la moral, llevará a cabo la admisión o negación de los medios de prueba ofrecidos como está previsto por el Artículo 298 de la Ley invocadas que a la letra dice:

ARTICULO 298.- Al día siguiente en que termine el Período del Ofrecimiento de Pruebas, el juez dictará resolución en la que determinará las pruebas que se



admitan sobre cada hecho, pudiendo limitar el número de testigos prudencialmente. En ningún caso el Juez admitirá pruebas o diligencias ofrecidas extemporáneamente que sean contrarias al derecho o a la moral, sobre hechos que no hayan sido controvertidos por las partes, o hechos imposibles o notoriamente inverosímiles o bien que no reúnan los requisitos establecidos en el Artículos 291 de este Código.

Contra el auto que admita pruebas que se encuentren en algunas de las prohibiciones anteriores, procede la apelación en el efecto devolutivo, y en el mismo efecto se admitirá la apelación contra el auto que deseche cualquier prueba siempre y cuando fuere apelable la Sentencia en lo principal. En los demás casos no hay más recurso que el de responsabilidad.

Por lo que término para que el juez del conocimiento determine las pruebas admitidas, y las que no, será de veinticuatro horas a partir de que termine el período de ofrecimiento aclarando que en la Ciudad de México no se da este supuesto en virtud de que por el exceso de trabajo al ser esta la Ciudad más poblada del planeta, las demandas superan en forma importante a las presentadas en los estados de la federación comparando el índice de juicios que cada estado tiene por año. Por lo que en la Práctica Forense en esta ciudad es un término que no se cumple.

La tercera etapa que es el período de Preparación de Pruebas no se encuentra regulado textualmente por el Código Procesal en un sólo precepto pero hace referencia a dicha preparación al referirse a cada una de las probanzas. Entendiéndose dicho término como todo el tiempo intermedio entre el auto que admite las pruebas y la fecha de desahogo de las mismas.

El Cuarto período que es el de Recepción y Desahogo de Pruebas, la legislación procesal de esta Ciudad señala dos términos:

- a) Término Ordinario.
- b) Término Extraordinario.

El Término Ordinario los encontramos cifrado en el Artículo 299 de la Ley y supracitada que a la letra dice:

**ARTICULO 299.-** El juez al admitir las pruebas ofrecidas procederá a la recepción y desahogo de ellas en forma oral, la recepción de las pruebas se hará en una audiencia a la que se citará a las partes en el auto de admisión, señalándose al efecto el día y la hora teniendo en consideración el tiempo para su preparación. Deberá citarse para esa audiencia dentro de los treinta días

siguientes a la admisión. La Audiencia se celebrará con las pruebas que estén preparadas, dejándose a salvo el Derecho de que se designe nuevo día y hora para recibir las pendientes y para el efecto se señalará la fecha para su continuación la que tendrá verificativo dentro de los quince días siguientes. En este caso no hay que seguir el orden establecido para la recepción de las pruebas.

Del análisis de dicho numeral encontramos que el período ordinario para el desahogo de las pruebas es de treinta días contados a partir del día en que fueron admitidas.

El Término Extraordinario lo encontramos señalado en los Artículo 300 y 301 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que a la letra dice:

ARTICULO 300.- Cuando las pruebas hubieren de desahogarse fuera del Distrito Federal o del país, se recibirán a petición de parte dentro de un término de sesenta y noventa días naturales, respectivamente siempre que se llenen los siguientes requisitos.

- I. Que se solicite durante el ofrecimiento de pruebas,

- II. Que se indiquen los nombres apellidos y domicilios de los testigos que hayan de ser examinados, cuando la prueba sea testimonial y,
- III. Que se designen, en caso de ser prueba instrumental los archivos públicos o particulares donde se hallen los documentos que han de cotejarse o presentarse originales.

El juez al calificar la admisibilidad de las pruebas, determinará el monto de la cantidad que el promovente deposite como multa en caso de no rendirse la prueba. Sin este depósito no se hará el señalamiento para la recepción de la prueba.

ARTICULO 301.- A la parte a la que se le hubiere concedido la ampliación a que se refiere el Artículo anterior, se le entregarán los exhortos para su diligenciación y si no rindiere las pruebas que hubiere propuesto, sin justificar que para ello tuvo impedimento bastante se le impondrá una sanción pecuniaria a favor de su contraparte equivalente al monto del depósito a que se hace mención en el Artículo anterior incluyendo la anotación en el registro judicial a que se refiere el Artículo 61; asimismo, se le condenará a pagar indemnización de daños y perjuicios en beneficio de su contraparte y además se dejará de recibir la prueba.

Al respecto empezaremos por establecer qué es o cómo podemos definir el Término Extraordinario para lo cual diremos que: TERMINO EXTRAORDINARIO, *"se le denomina al lapso de tiempo que el juzgador otorga a las partes previa la satisfacción de ciertos requisitos para el desahogo de pruebas fuera del Distrito Federal o de la República Mexicana"*, a este lapso se le denomina extraordinario porque es tiempo superior al que prevé la Ley en el desahogo de pruebas en forma ordinaria, esto es que el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal señala en el Artículo 299 el desahogo de las pruebas que será en un término de treinta días posteriores al auto, que admite las pruebas pero el Artículo 300 del mismo ordenamiento legal ya contempla el período que la doctrina denomina extraordinario.

Como podemos ver este período puede ser de sesenta o noventa días según sea el caso y dependiendo del lugar en que deba llevarse a cabo el desahogo de pruebas, podemos concretar diciendo que será de 60 días cuando el desahogo tendrá verificativo fuera del Distrito Federal, pero en cualquiera de los Estados de la República Mexicana y será de 90 días cuando el desahogo sea fuera de nuestro país.

A efecto de prever el mal uso que se pudiera dar a este Término Extraordinario o que sólo sea con el fin de retardar el procedimiento del que se trate, el Código Adjetivo de esta Ciudad establece la forma en que será sancionado el litigantes que actúe de mala fé, dándole mal uso a este término de prueba, lo cual encontramos

contenido en el Artículo 301 del mismo ordenamiento legal.

### **Condiciones que debe Reunir la Prueba para su Admisión**

Los requisitos que deben reunir las pruebas para que sean admitidas, están contenidos en el Capítulo Tercero del Título Sexto del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, asimismo la doctrina en materia procesal las califica de la siguiente manera: Una prueba es admisible si:

- a) Si se ofrece dentro del término legal establecido para tal efecto que en el Distrito Federal es de diez días comunes a las partes.
- b) Debe estar relacionada con los hechos controvertidos materia de la *litis*.
- c) Se señalan los puntos respecto de los que deberá versar en el caso de periciales, inspecciones o reconocimientos, etc.
- d) Se exhiben los documentos aludidos en el escrito de ofrecimiento .
- e) Se indiquen los puntos en los que deberá versar la Inspección.

- f) Se hace el señalamiento exacto de los archivos o nombre de la persona que tiene en su poder los documentos ofrecidos cuando los mismos no se encuentran en poder del oferente.
- g) Se exhiben los interrogatorios de los testigos que radican fuera de la jurisdicción del juzgado donde está radicado el juicio.
- h) Tratándose de la testimonial o la pericial se expresan los nombres de testigos y peritos así como sus domicilios bajo el apercibimiento de ser desechadas.

### **Formalidades que deben Satisfacerse para el Desahogo de las Pruebas**

Nos referiremos específicamente a las circunstancias en vía de preparación que deben existir para hacer posible el desahogo de los medios de prueba admitidos.

Estas formalidades están constituidas por las condiciones que deben existir tendientes a lograr el acreditamiento de la Acción o de las excepciones interpuestas.

Para su desahogo todas las pruebas deben reunir tres circunstancias:

- Forma.

- Lugar.
- Modo.

Teóricamente se pretende que sea oral el desahogo de las pruebas en materia civil, lo que se encuentra previsto en el Párrafo 1o. del Artículo 299 del Código en comento para el Distrito Federal, la recepción de las pruebas se hará en una audiencia a la que se citará a las partes en el auto-admisorio, señalándose para tal efecto el día y la hora teniendo en consideración el tiempo para su recepción.

Deberá citarse para esa audiencia dentro de los treinta días siguientes a la admisión, la recepción de dichas pruebas por definición deberá tener lugar en la audiencia de pruebas y alegatos como lo prevé el precepto legal antes citado, esto es el tribunal se instalará el día y hora señalados para el desahogo de las pruebas.

La forma oral de recepción o desahogo de las pruebas exige que una vez instalado el tribunal, la autoridad que preside la audiencia declara abierta la audiencia manifestando que se procederá al desahogo de las pruebas.

En el caso de la autoridad de primera instancia, el juez es quien debe presidir y dirigir el desarrollo de la audiencia, debe conservar el orden y asegurarse de que



impere la equidad entre los contendientes. Otros de los aspectos que deberán satisfacerse, es refiriéndose al lugar, debiéndose desahogar las pruebas en el interior del local del juzgado a excepción de los siguientes casos:

- a) Cuando deba tener verificativo la Prueba de Inspección Judicial que invariablemente se practicará en el lugar donde se encuentre la cosa a inspeccionar.
- b) Cuando se trate de la prueba pericial que el sitio idóneo siempre lo constituirá un laboratorio, etc.
- c) Para el reconocimiento de incapaces lo cual deberá trasladarse la autoridad al lugar donde se encuentre.
- d) Para el caso de pruebas que por su naturaleza se requiera tomar declaraciones por ejemplo, confesional y testimonial que deban desahogarse fuera del Distrito Federal por encontrarse las personas viviendo en lugares fuera de la jurisdicción del Tribunal del Distrito Federal.
- e) En el caso de que el absolvente o el testigo se encuentren enfermos podrá

tomárseles su declaración en el lugar donde se encuentran, siempre y cuando su estado de salud lo permita.

- f) Cuando el que deba rendir declaración sea un anciano de más de setenta años (Artículo 358, C.P.C.).

Concluyendo respecto del lugar donde deberán desahogarse las pruebas admitidas a las partes, el lugar debe ser el recinto donde se encuentran el local del juzgado con las excepciones antes citadas.

Por último en cuanto al modo encontramos que en el Distrito Federal las pruebas se desahogan en forma variable, es decir como puede ser que siga el orden de la Audiencia de Ley Iniciando por la Confesional de las Partes, siguiendo las testimoniales y así sucesivamente estableciéndose en la práctica una fecha independiente para las inspecciones, periciales y pruebas que tendrán verificativo fuera del juzgado. Aclarando que la excepción a dicho orden lo constituyen cuando las pruebas no han sido debidamente preparadas como son: *notificación personal de confesionales* a cargo de las partes, envío de citatorios a los testigos, etc., por lo que no estando debidamente preparadas todas las pruebas se desahogan las que estén en condiciones adecuadas para su desahogo, señalándose nueva fecha para las que hayan faltado.

## Los Medios de Pruebas

Desde un punto de vista puramente lógico, las partes podrían acreditar al juez la verdad de los hechos controvertidos, valiéndose de cualquier medio que en su concepto pudiera crear la convicción necesaria en el ánimo del juzgador para aceptar como verdadero un hecho concreto. Sin embargo, el Legislador a través del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal ha establecido medios de prueba que deben ser ofrecidos, desahogados y valorados dentro del procedimiento en otras palabras son las fuentes de las que el juzgador extraerá su propia convicción y para ello el código en mención establece una serie de procedimientos que conducen a su preparación y desahogo.

La mejor fórmula es que los medios de prueba señalados por el Legislador no constituyan una formalidad limitante para el juzgador y las partes en su pretensión de lograr el conocimiento de la verdad en toda controversia, es decir que se alleguen de los elementos de prueba necesarios que logren el descubrimiento de la verdad, teniendo como fundamento para su ofrecimiento el Artículo 289 del Código en comento, estando obligado el juzgador a su admisión si los medios de prueba presentados *le producen convicción respecto de los hechos controvertidos dudosos*, aunque no se encuentren enunciados en el Código supraindicado, por lo que

actualmente los litigantes se dotan de los medios de prueba existentes para acreditar la procedencia de su acción o de sus excepciones.

En el Distrito Federal, hasta mil novecientos ochenta y seis la Legislación Procesal enunciaba los medios de prueba que se podían ofrecer a través del Artículo 289 que a la letra decía:

ARTICULO 289.- La Ley reconoce como medios de prueba:

- I. Confesión.
- II. Documentos Públicos.
- III. Documentos Privados.
- IV. Documentos *Periciales*.
- V. Reconocimiento o Inspección Judicial.
- VI. Testigos.
- VII. Fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos y en general todas aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia.
- VIII. Fama Pública.
- IX. Presunciones.
- X. Y demás medios que produzcan convicción en el juzgador.

Dicho Artículo enumera medios de prueba que no constituyen la única alternativa para el oferente, toda vez que en las fracciones séptima y décima permitían otras pruebas como son los nuevos descubrimientos de la ciencia y cualquier medio que produzca convicción en el ánimo del juzgador por que dicho precepto no era taxativo.

La Legislación actual ya no hace esa relación de medios de prueba, permite al oferente el ofrecimiento de todos aquellos que produzcan convicción en el juzgador quedando su texto de la forma siguiente.

ARTICULO 289.- Son admisibles como medios de prueba aquellos elementos que pueden producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos.

Sin embargo, el Código en comento si bien es cierto a través de dicho Artículo permite al litigante ofrecer todo tipo de prueba que produzca convicción en el ánimo del juzgador también es cierto que regula sólo algunas probanzas a través de los Artículos del 308 al 384, siendo los siguientes:

- La Confesión.
- La Prueba Instrumental.
- La Prueba Pericial.
- El Reconocimiento o Inspección Judicial.
- La Testimonial.
- Las Fotografías, Copias Fotostáticas y Demás Elementos.
- La Presuncional.

A continuación se mencionan el concepto de cada una de las probanzas antes relacionadas según los criterios doctrinales que en materia de Derecho Procesal Civil preponderan en esta entidad federativa.

### **Concepto de la Prueba Confesional**

Para el Mtro José Becerra Bautista<sup>[26]</sup> es el reconocimiento de hechos propios que produce efectos jurídicos en contra de quien siendo capaz lo hace libre y formalmente.

---

[26] El Proceso Civil en México. Editorial Porrúa, S.A. Décima Edición. México. 1982. Págs 103 y 104.

Es importante destacar que para este autor a la confesión la clasifica en: Confesión Judicial y Confesión Extrajudicial siendo la primera aquella que se hace en juicio y la segunda la que se hace fuera del juicio. En ambos casos es un acto de voluntad que constituye el reconocimiento de un hecho u omisión al que el Derecho atribuya el nacimiento, la modificación o la extinción de una relación jurídica.

A pesar de que se le ha dejado de considerar la reina de las pruebas como medio de pruebas sigue siendo preponderante su existencia dentro de todo Proceso, cuando se confiesa judicialmente, toda vez que dicha confesión o reconocimiento hace prueba plena como establece la máxima que dice: *Nulla est major provatio quam proprii oris confesio, indeoque dicitur plenissima provatio et superate omne genus probationis*, quiere decir: Ninguna prueba es mayor que la confesión de boca propia, por lo cual se denomina prueba plenísima que supera a cualquier otro género de probanza, la Legislación Adjetiva en Materia Civil del Distrito Federal regula la prueba de confesión en los Artículos 308 al 326 en los que establece los lineamientos a seguir para su ofrecimiento, preparación o desahogo.

## Concepto de la Prueba Documental o Instrumental

Para el Mtro. Carlos Arellano García<sup>[27]</sup> la prueba documental también denominada Instrumental es aquella que está constituida por aquellos elementos acrediticios denominados documentos. Entendiendo dicho autor como documento: Al objeto material en el que obran signos escritos para dejar memoria de un acontecimiento, la clasificación de los documentos más générica es aquella que los divide en públicos y privados y de éstas se derivan varias subclasificaciones.

Para Kish los documentos públicos son aquellos que son autorizados por funcionarios públicos o depositarios de la fé pública dentro de los límites de su competencia y con las solemnidades prescritas por la Ley. Por exclusión documentos privados son todos los demás.

El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal los regula en el Capítulo Cuarto del Título Sexto en la Sección Tercera denominándolos prueba instrumental y los divide en públicos y privados como lo preven los Artículos 327 y 334 del ordenamiento legal antes citado.

---

[27] Derecho procesal Civil. Editorial Porrúa, S.A., Segunda Edición. México. 1987. Págs. 281, 282 y 283.



## **Concepto de la Prueba Pericial**

Es aquella que es emitida por peritos, entendiéndose por peritos a las personas que auxilian al juez con sus conocimientos científicos, artísticos o técnicos en la investigación de los hechos controvertidos. El Código Adjetivo para el Distrito Federal en Materia Civil regula dicha probanza en los Artículos 346 a 353 en los que establece los requisitos que debe reunir una persona para comparecer con el carácter de perito, la forma y términos en que debe ofrecerse dicha prueba, así como los lineamientos tendientes a seguir para llevar a cabo su desahogo dependiendo de la actividad de que se trate.

La generalidad de los autores en materia procesal no hacen mención de un concepto concreto de lo que es la prueba pericial, por lo que del estudio de éstos me he permitido proponer uno propio definiéndolo como: El medio de prueba basado en la intervención de un perito que aplicando sus conocimientos relativos a la materia de que se le requiera aportará al Proceso su valoración del medio de prueba que se le asigne para su estudio, denominándosele a la conclusión del estudio realizado dictamen.

Es importante mencionar que el perito está calificado por ser entendido en alguna ciencia o arte por lo que el objeto de su intervención es ilustrar el juez o

tribunal de que se trate acerca de una realidad concreta relacionada con los puntos controvertidos del juicio. En la doctrina se ha discutido mucho sobre la naturaleza del peritaje pues unos consideran a los peritos como auxiliares del juez y otros medios de prueba, ambas funciones se encuentran contempladas en nuestra Legislación positiva.

Desde el punto de vista teórico, el juez tiene conocimientos generales a partir de su formación profesional, sin embargo en los problemas controvertidos se necesita acudir algunas ocasiones a personas que tengan otro tipo de conocimientos que son indispensables para el esclarecimiento de un problema judicial concreto.

El hecho de que el juez no se valiera de estos auxiliares, sería cerrar los ojos a una realidad, lo cual redundaría en grave perjuicio de la administración de justicia.

### **Concepto de la Prueba Testimonial**

El procesalista Ugo Rocco<sup>[28]</sup> la define como la prueba por medio de testigos que constituyen una declaración que una parte extraña al Proceso rinde ante los órganos jurisdiccionales sobre la verdad o existencia de un hecho jurídico, esto es de

---

[28] Teoría General de Proceso Civil. Traducción del Lic. Felipe de Jesús Tena, Editorial Porrúa, S.A. México. 1959. Pág. 441.

un hecho al que el Derecho Objetivo vincula el nacimiento, la modificación o la extinción de una relación jurídica o de una situación jurídica relevante.

De la anterior definición podemos deducir que la prueba está basada en la declaración hecha por una persona que no es parte en el juicio, sin embargo aportará al Proceso su conocimiento respecto de los hechos litigiosos, basado en lo que a través de sus sentidos pudo ver, oír, sentir, oler, etc., y a quien se le denomina en el Proceso Testigo.

El Código Adjetivo Civil para el Distrito Federal regula dicha probanza en los Artículos 356 al 372 en los que hace referencia a que todos los que tengan conocimiento de los hechos, que las partes deben de probar están obligados a declarar con el carácter de testigos. En el Distrito Federal los testigos son interrogados por el oferente a través del abogado patrono, quien en el momento de la audiencia les formulará una serie de preguntas verbales directamente, que deberán estar relacionadas con los hechos controvertidos, deberán estar formuladas en términos claros y precisos debiendo reunir los requisitos previstos por el Artículo 360 del ordenamiento legal antes invocado bajo apercibimiento de que al no dar cumplimiento a dicho numeral, las preguntas planteadas al testigo serán desechadas al momento de su calificación por parte de la autoridad que precida la audiencia.

La prueba testimonial tuvo su importancia en el pasado cuando la mayoría de las personas no sabían ni leer, ni escribir, ni la prueba documental estaba tan extendida como ahora. Esa importancia ha desaparecido, no sólo por la preponderancia que los documentos tiene en la vida moderna, sino también porque la psicología ha demostrado el poco valor de las declaraciones de los testigos y de qué manera pueden ser falsas basándose en la mala fé. También redunda en dicha probanza la apreciación que el testigo puede hacer en relación a lo que pretende declarar ya que influyen en los testimonios factores como son la ignorancia, la simpatía, la antipatía, las creencias religiosas, los prejuicios, la poca agudeza de sus sentidos corporales, el fanatismo, etc., por lo que dichas declaraciones pueden ser atacadas con la intensión inmediata de que sean declaradas nulas a partir de que se promueve el incidente de tachas respectivo que contendrá las circunstancias que en concepto del promovente afecten la credibilidad de los testimonios rendidos como lo prevé el Artículo 371 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

### **Concepto de la Prueba de Inspección Judicial**

Es el examen sensorial directo realizado por el juez en personas u objetos relacionados con la controversia.

También se le ha denominado vista de ojos, inspección ocular o reconocimiento. La Legislación Procesal del Distrito Federal regula dicha probanza en los Artículos 354 y 355 estableciendo en éstos las formalidades que se deberán satisfacer para el desahogo de esta prueba, señala quienes podrán concurrir y la secuela que debe seguir dicha diligencia.

La Inspección Judicial es el único medio de prueba en el que la autoridad percibe directamente a través de sus sentidos, objetos o personas materia de la controversia. La denominación de algunos tratadistas respecto a esta prueba es refutable, toda vez que también se refieren a este medio de prueba denominándolo vista de ojos, lo cual se presta a discusión ya que el reconocimiento o inspección ocasionalmente no se concretará a lo que vea el juez, sino que puede abarcar el uso de sus otros sentidos como son el olfato, el oído, el tacto, etc., cabe destacar que esta prueba puede abarcar muebles, inmuebles, documentos y personas; el Artículo 297 impone al oferente que al momento de proponer dicha prueba deberá señalar los puntos sobre los que deberá versar so pena de desecharse su admisión por falta de las formalidades establecidas por la Ley.

La cualidad de este medio de prueba a diferencia de los demás permite al juzgador la recepción sensorial y directa que le facilite obtener una certidumbre

absoluta respecto de los objetos sujetos a la inspección. Cabe destacar que cuando la inspección judicial recae sobre las partes y éstas se niegan a sufrirla, no pueden ser compelidas para vencer su resistencia. En tal caso corresponde aplicar en razón de dicha negativa lo previsto por el Artículo 287 del Código en comento que a la letra dice:

ARTICULO 287.- Cuando una de las partes se oponga a la inspección o reconocimiento ordenados por el tribunal para conocer sus condiciones físicas o mentales o no conteste a las preguntas que el tribunal le dirija, éste debe tener por ciertas las afirmaciones de la contraparte salvo prueba en contrario. Lo mismo se hará si una de las partes no exhibe a la inspección del tribunal la cosa o documento que tiene en su poder.

La prueba de inspección es inmediata y directa, hace prueba plena de sus resultados pero siempre que éstos no tengan relación con las pruebas testimonial y pericial con las que se combina, porque entonces queda sujeta a los principios que rigen a estas últimas. Además, no podemos olvidar que dicha probanza sólo puede recaer sobre hechos y circunstancias que se pueden apreciar por medio de los sentidos.

Los tratadistas mencionan que si es un examen directo del juez, éste no puede delegarlo en empleados subalternos como serían actuarios o secretarios de acuerdos porque se desvirtuaría la naturaleza jurídica de la prueba, sin embargo esto es en teoría, ya que en la práctica jurídica en el Distrito Federal quienes realizan la inspección o reconocimiento son los secretarios de acuerdos adscritos a cada juzgado, por lo que en el fondo la importancia de esta prueba atribuida a la intervención directa del juzgador se ha perdido.

### **Concepto de la Prueba Presuncional**

Es la inferencia que la Ley o el juez hacen de un hecho conocido y probado para probar otro litigioso.

Presunción:

Etimológicamente quiere decir, toma anticipada de las cosas. La diferencia de esta prueba en relación a las demás es que es subjetiva, ya que es consecuencia del análisis, valoración y deducción por parte del juzgador basado en los medios de prueba tangibles para establecer una conclusión a partir de la concatenación de las demás pruebas.

Esta prueba se clasifica en presunción legal y humana, la primera la establece la Ley y la segunda el Juez. Los jueces están facultados para considerarlas de oficio valorándolas de acuerdo con la Legislación Procesal del Distrito Federal que regula dicha probanza a través de los Artículos 379 a 383 definiéndola como la consecuencia que la Ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido.

Hay Presunción Legal cuando la Ley la establece expresamente y cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la Ley, hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquel, el que tiene a su favor una presunción legal sólo está obligado a probar el hecho en que se funda la presunción. En sí la prueba presuncional, es un método reconstructivo de inferencia o de deducción de los hechos materia de la controversia.

No se admite prueba contra la Presunción Legal, cuando la Ley lo prohíbe expresamente y cuando el efecto de la presunción es anular un acto o negar una acción, salvo el caso en que la Ley haya reservado el Derecho de probar esta prueba, por sí misma no aporta información nueva ni adicional al Proceso en el sentido en que aportan esa información todos y cada uno de los otros medios probatorios.



Por la presunción no se le allegan al juzgador nuevos materiales informativos, sino que por el contrario por la presunción a partir del material informativo recabado se llegan a extraer nuevas implicaciones a las que se les podía catalogar como novedosas. La presunción no es forzosamente una deducción puede ser también una inducción. Las presunciones legales y humanas no son medios de prueba en cuanto que no producen el convencimiento sino que son el convencimiento mismo, concluyendo la prueba de presunciones pertenece al grupo de las indirectas y críticas, ya que no produce en forma alguna el hecho que se quiere probar por lo que pueden ser destruidas dichas presunciones por otros medios de prueba.

### **Las Fotografías, Copias Fotostáticas y Demas Elementos**

El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal expresamente señala dentro de los medios de prueba admisibles a las partes, las fotografías, copias fotostáticas y demás elementos a través de los Artículos 373, 374 y 375; permitiendo con esto a las partes acreditar hechos o circunstancias que tengan relevancia en el negocio que se ventile, los tratadistas identifican a las dos primeras como pruebas científicas dominándolas así, porque es a través de la evolución científica y técnica como han podido dar noticia de los hechos acaecidos con antelación y que están

vinculados con los puntos controvertidos, todo lo anterior permite al juzgador el descubrimiento de la verdad dentro del proceso, probanzas que son producto de la época moderna que se ha caracterizado por un acelerado avance tecnológico de la humanidad, para el Procesalista Carlos Arellano García las pruebas científicas: Son aquellos medios acrediticios que aportan conocimiento al juzgador mediante el empleo de elementos producto de la evolución científica y técnica respecto de los hechos controvertidos en el Proceso.

Cabe destacar que para el legislador del Distrito Federal la palabra fotografía en los Artículos correspondientes a las pruebas que tratamos tiene un significado más amplio que como literalmente lo entenderíamos, ya que el Artículo 373 del Código Adjetivo en Materia Civil establece que quedan comprendidas dentro del término fotografías, las cintas cinematográficas y cualesquiera otras producciones fotográficas, encontrando comprendidas dentro de éstas últimas a las diapositivas, fotostáticas, etc.

Respecto a los demás medios de prueba catalogados como científicos enunciaremos además de los anteriormente nombrados los registros dactiloscópicos, videograbaciones, audiocassettes, video láser, etc. y demás elementos que puedan constituir un medio de influir en el ánimo del juzgador, en el momento de dictar la

sentencia correspondiente, encontramos contenido lo anterior en el Artículo 374 del Código en comento que a letra menciona:

ARTICULO 374.- Como medio de prueba deben admitirse también los registros dactiloscópicos, fonográficos y demás elementos que produzcan convicción en el ánimo del Juez.

La parte que presenten esos medios de prueba deberá ministrar al tribunal los aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros y reproducirse los sonidos y figuras.

El Artículo 375 hace referencia a los escritos y notas taquigráficas, los cuales podrán presentarse teniendo la obligación el oferente de acompañar a éstos con la traducción correspondiente, precisando el sistema taquigráfico empleado.

Terminaríamos diciendo que en la actualidad en la práctica forense los jueces sólo le imponen la calidad de pruebas presuncional a las probanzas antes referidas, toda vez que con motivo del avance tecnológico actual, existen medios a través de los cuales la realidad plasmada en las fotografías, fotostáticas, video casetes, audio casetes, diapositivas, etc., puede ser alterada a través del fotomontaje, doblaje de voz y otra medios producto de la tecnología moderna.

## **FASE CONCLUSIVA**

### **Contenido de la Fase Conclusiva**

Es la etapa de todo juicio en que las partes después de haber rendido los medios de prueba que se les admitieron, pueden hacer valer en su favor lo apartado al Proceso, que les beneficia tanto de su parte como de la contraria a través de un escrito hacen del conocimiento del juez, los razonamientos que estimen pertinentes para producir convicción en su ánimo del juzgador para tal efecto apoyan sus argumentos con Citas Doctrinarias, Jurisprudencia, Leyes no aplicadas, Leyes mal aplicadas, Interpretaciones de la Ley, etc., con la finalidad de poner en evidencia la procedencia de la acción intentada, en el caso del actor, o de las excepciones opuestas por el demandado según el escrito de la parte que promueva. A estas argumentaciones se les denomina Alegatos.

### **Definición Etimológica de los Alegatos**

Para el Mtro. José Ovalle Favella<sup>[29]</sup> son las argumentaciones que formulan las partes una vez realizadas las fases postulatoria y probatoria con el fin de tratar de

---

[29] Dercho Procesal Civil. Editorial Harla, Segunda Edición. 1987. México. Pág. 150.

demostrar al juzgador que las pruebas desahogadas confirman los hechos afirmados y que son aplicables los fundamentos de Derecho Aducidos por cada una de ellas.

El Tratadista José Becerra Bautista<sup>[30]</sup> en su obra procesal los define como: las Argumentaciones Jurídicas tendientes a demostrar al tribunal la aplicabilidad de la norma abstracta al caso controvertido con base en las pruebas aportadas por las partes.

### **Contenido de los Alegatos Según la Doctrina**

Deben contener una relación breve y precisa de los hechos controvertidos y un análisis detallado de las pruebas aportadas para probarlos, la enunciación de los resultados obtenidos en las pruebas ofrecidas, la aplicación de los preceptos de Derecho invocados, pudiendo apoyar dichas afirmaciones sobre la interpretación de las normas aplicadas en jurisprudencia de las Suprema Corte de la Nación, así como la doctrina que se haya ocupado para la interpretación de los preceptos jurídicos en cuestión. También se deberá hacer notar los medios de prueba aportados por la contraria, haciendo énfasis en las omisiones en que incurrió, recalcando las pruebas

---

[30] El Proceso Civil en México. Editorial Porrúa, S.A. México. 1982. Décima Edición. Pág. 155.

que resultaron inadecuadas, insuficientes o carentes de fuerza probatoria para confirmar los hechos afirmados por dicha oferente.

Si bien es cierto el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, prevé a través del Artículo 393 el Derecho de las partes de alegar por si o por voz de sus abogados patronos en forma oral y por un término de quince minutos para cada una si se trata de primera instancia y de media hora si es ante el tribunal de Alzada, también dicho precepto prohíbe que se dicten los alegatos en el momento de la audiencia, situación que encontramos prevista en el Artículo 394 de dicho ordenamiento, sin embargo este último precepto otorga el Derecho a que las partes presenten sus conclusiones por escrito, teniendo un término de tres días, contados a partir de que tuvo verificativo la última audiencia de desahogo de pruebas, plazo que encontramos previsto en la Fracción IV del Artículo 137 del ordenamiento legal supraindicado.

## **SIGNIFICADO GRAMATICAL DE LA PALABRA ALEGATO**

Es un vocablo con un significado típicamente forense y consiste en exponer las razones que se tienen a favor de una persona.

## **NATURALEZA JURIDICA DE LOS ALEGATOS**

Es una carga procesal, toda vez que la falta de expresión de alegatos produce consecuencias desfavorables a quien omite presentarlos.

El Tribunal no puede quedar vinculado por las alegaciones de las partes siendo de su potestad soberana tomarlos en cuenta u omitirlas. El Juez tiene la obligación de aplicar la norma abstracta al caso concreto partir del estudio lógico jurídico que haga de éste, por lo tanto ninguna fuerza externa puede obligarlo a que resuelva la controversia basándose en el criterio sostenido por alguno de los abogados patronos de las partes a través de sus alegatos planteados en su escrito de conclusiones.

La función jurisdiccional no puede ser reemplazada por el criterio de los abogados. Concluyendo la naturaleza jurídica de los alegatos es que son una carga procesal.

### **Formas de Alegar**

Los alegatos se pueden expresar en forma oral o escrita.

## **Los Alegatos Escritos:**

El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal a través del Artículo 394 prevé esta forma de alegar, expresando que las partes podrán presentar sus conclusiones por escrito, hasta antes de la reforma de 1973 al Código supraindicado establecía un término común de cinco días para que las partes presentarán por escrito sus conclusiones, a partir de la reforma en mención dicho numeral establece la posibilidad de presentar por escrito sus conclusiones pero no señala un término específico para dicho acto, por lo que para subsanar dicha laguna en la Ley, es aplicable el Artículo 137 Fracción IV del Código Adjetivo en materia civil que a la letra dice:

ARTICULO 137.- Cuando este Código no señale terminos para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho se tendrán por señalados los siguientes:

- I. Nueve días para interponer el recurso de apelación de Sentencia Definitiva.
- II. Seis días para apelar de sentencia interlocutoria o auto.
- III. Tres días para la celebración de juntas reconocimientos de firmas, exhibición



de documentos, dictamen de peritos, a no ser que por circunstancias especiales *creyere justo* el juez ampliar el término, lo cual podrá hacer por tres días más.

IV. Tres días para todos los demás casos salvo disposición legal en contrario.

Por lo que es entendible que el término para presentar las conclusiones es de tres días, es importante aclarar que el Artículo 394 en mención expresa que los alegatos serán verbales, sin embargo cuando algún litigante ha presentado por escrito sus alegatos los ha denominado conclusiones como lo establece dicho numeral, pero debido a que no son tomados en consideración al momento de dictar la sentencia definitiva, la generalidad de los postulantes se abstienen de presentarlos por considerarlos tiempo perdido.

### **Los Alegatos Orales**

La Legislación del Distrito Federal en Materia Civil a través de los Artículos 393, 394 y 395 prevén dicho acto jurídico expresando lo siguiente:

ARTICULO 393 .- Concluida la recepción de las pruebas el tribunal dispondrá que las partes aleguen por sí o por sus abogados o apoderados, primero el actor y luego el demandado; el Ministerio Público alegará también en los casos en que intervenga procurando la mayor brevedad y concisión. No se podrá hacer uso de la palabra por más de un cuarto de hora en primera instancia y de media hora ante el Tribunal de Alzada.

Oralmente se alegará en la misma audiencia de desahogo de pruebas una vez recibidas éstas, teniendo la limitante de no poder dictar los alegatos durante el desarrollo de la diligencia prohibición que encontramos contenida en el Artículo 394 del Código Adjetivo que a la letra dice:

ARTICULO 394.- Queda prohibida la práctica de dictar los alegatos a la hora de la diligencia. Los alegatos serán verbales y pueden las partes presentar sus conclusiones por escrito.

Durante la audiencia de pruebas y alegatos los tribunales sobre su más estricta responsabilidad deberán procurar que prepondere la equidad entre las partes, evitando disgresiones y reprimiendo con energía las promociones de las partes que tengan como finalidad retardar el juicio.

Concluyendo, podemos afirmar que la Legislación Adjetiva en Materia Civil para el Distrito Federal adopta para la expresión de alegatos el criterio ecléctico, es decir permite al litigante alegar verbalmente y presentar sus conclusiones por escrito, adoptado con ello una posición intermedia en lugar de seguir criterios extremos como lo encontramos previsto en el Artículo supraindicado.

### **Momento Idóneo Para Alegar**

En el momento en que tenga verificativo el desahogo de la última de las pruebas admitidas a las partes inmediatamente se pasará a la etapa de alegatos como encontramos previsto en el Artículo 393 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, por lo que el momento idóneo para alegar siempre, lo determinará la recepción de la última prueba admitida a las partes dentro de la audiencia de pruebas y alegatos.

### **LOS ALEGATOS DE BIEN PROBADADO**

Para Caravantes, "Es un escrito en el que cada parte insiste en sus pretensiones, haciendo las reflexiones y deducciones que suministran a su favor las

pruebas, impugnando con conocimiento de causa todas aquellas en que poya el adversario si intensión y esforzándose cuanto pueda para demostrar la verdad de sus asertos y la justicia de su derecho". A este ocurso se le dice de bien probado porque tiene por objeto para el que lo presenta demostrar que resulta bien y cumplidamente probado su derecho. Debe presentarse después de que se haya rendido la última prueba y antes del auto de citación para sentencia.

Cabe destacar que excepcionalmente los alegatos, podrán tener verificativo en una audiencia fuera de la última de desahogo de pruebas, esto sucederá cuando las pruebas pendientes por desahogar sean documentales públicas o cuando haya pruebas que debieron desahogarse a través de exhorto en entidades fuera de la jurisdicción del juzgado, en ambos casos la oportunidad de la presentación de dichas probanzas será imputable a las Instituciones y Autoridades requeridas y si no estuvieren agregadas en el expediente en la última audiencia de desahogo de pruebas, no podrá pasarse al período de alegatos, por lo que los litigantes tendrán promover ya que hayan llegado al juzgado los informes y pruebas pendientes, solicitándole al juez que toda vez que ya no hay pruebas pendientes por desahogar les señale expresamente una audiencia para que tenga verificativo los alegatos y así se pueda citar para oír la sentencia definitiva. Es el único caso en que podrá llevarse a cabo el período de alegatos en una audiencia señalada exclusivamente para alegar.

## **CAPITULO TERCERO**

### **INTRASCENDENCIA JURIDICA DE LOS ALEGATOS EN EL PROCESO CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL**

## **CAPITULO TERCERO**

# **INTRASCENDENCIA JURIDICA DE LOS ALEGATOS EN EL PROCESO CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL**

### **LOS ALEGATOS COMO ETAPA PREVIA A LA CITACION PARA SENTENCIA**

Una vez qe se han desahogado todas las pruebas admitidas a las partes de las que a éstas les ha sido posible rendir y aún las decretadas por el juez con el eventual carácter para mejor proveer, por haber siempre imponderables en la materia procesal, se cierra el período en el cual el juez recibe dichas probanzas y se pasa a la fase conclusiva denominada teóricamente período de Alegatos.

En esta fase del Proceso deberá predominar la actitud razonada del litigante pero lamentablemente en la práctica en el Distrito Federal concretamente en la rama

Civil se ha minimizado la importancia que los tratadistas le han dado a los Alegatos. En el desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos no se da intervención a las partes para que aleguen ni en el acta correspondiente se hace constar por parte de los secretarios de acuerdos el hecho de que el litigante haya llevado a cabo verbalmente su exposición de alegatos. En el Distrito Federal podemos afirmar que ni siquiera se les da el uso de la palabra a las partes a efecto de que aleguen las circunstancias que en su concepto les favorece, prácticamente de oficio la persona que presida la audiencia ya sea el juez o el secretario de acuerdos (generalmente el Juez no sale en todo el día de su privado) textualmente le dictan a la mecanografa en el momento en que se desahoga la última prueba. “En virtud de que ya no hay pruebas pendientes por desahogar se paso al período de alegatos y sin que medie palabra alguna de las partes manifiesta “EN EL QUE LAS PARTES ALEGARON LO QUE A SU DERECHO CONVINO”, CONSECUENTEMENTE SE CITA PARA OIR SENTENCIA DEFINITIVA”, argumentos que hace valer sin que alguna de las partes haya pronunciado alguna palabra, porque ni siquiera se les da la oportunidad de hacer alguna intervención. Lo anterior es lo que sucede cotidianamente en todo juicio de naturaleza Civil en el Distrito Federal, lo que pone en evidencia la innecesaria existencia de la figura jurídica de los alegatos en todo juicio civil, y por el contrario si no se da cumplimiento a dicha etapa no se cita para oír la Sentencia Definitiva que conforme a Derecho corresponda. De lo anterior podemos concluir

que la etapa de alegatos al no ser necesaria en los juicios Civiles en el Distrito Federal sólo constituye un acto que retarda la emisión de la Sentencia Definitiva por lo que debe suprimirse, ya que su permanencia en el proceso civil constituye una transgresión al principio plasmado por el legislador en el Artículo 17 de nuestra Carta Magna, que pregonar el derecho que tiene toda persona a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las Leyes, EMITIENDO SUS RESOLUCIONES DE MANERA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL.

## **EFFECTOS DERIVADOS DE LA OMISION DE EXPRESION DE ALEGATOS EN EL PROCESO CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL**

Concluyendo el desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas a cada una de las partes se pasará a la etapa de alegatos como lo prevé el Artículo 393 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que a la letra dice:

ARTICULO 393. - Concluida la recepción de las pruebas el Tribunal dispondrá que las partes aleguen por sí o por sus abogados o apoderados, primero el actor y luego el demandado. El Ministerio Público alegará también en los casos en



que intervenga procurando la mayor brevedad y concisión. No se podrá hacer uso de la palabra por más de un cuarto de hora en primera instancia y de media hora en segunda.

Dicho precepto otorga a cada uno de los litigantes el Derecho de alegar verbalmente por un término de quince minutos ante el Juez Natural y de media hora ante el Tribunal de Alzada. El Artículo 394 del mismo ordenamiento legal establece la prohibición de que los litigantes o sus patronos dicten los alegatos en el momento de la diligencia, sin embargo otorga la oportunidad a esto de que presenten sus conclusiones por escrito, en este precepto encontramos que el Legislador estableció en el Proceso Civil para el Distrito Federal la forma ecléctica respecto a la expresión de los alegatos, es decir da la posibilidad de que las partes aleguen verbalmente y presenten las conclusiones de dichos alegatos por escrito, sin embargo la realidad que se vive en los juzgados de primera instancia en el Distrito Federal concretamente en las audiencias de prueba y alegatos en las ramas, civil, familiar y arrendamiento inmobiliario es otra, ya que el Derecho contenido en los numerales supraindicados siempre es vulnerado.

Ya que en ningún momento se le da el uso de la palabra para que aleguen verbalmente y por el contrario prácticamente de oficio, la persona que preside la

audiencia, ya sea el juez o el secretario de acuerdos inmediatamente de que se desahogaron todas las pruebas procede a dictarle a la mecanografa en los siguientes términos: "Y NO HABIENDO MAS PRUEBAS QUE DESAHOJAR SE PASA AL PERIODO DE ALEGATOS EN EL QUE LAS PARTES ALEGARON LO QUE A SU DERECHO CONVINO, CONSECUENTEMENTE SE CITA PARA OIR SENTENCIA DEFINITIVA", toda vez que los alegatos constituyen una carga procesal para las partes, la omisión de la expresión de éstos verbalmente o en la presentación de conclusiones por escrito, no constituye ningún problema procesalmente hablando, ya que quien no lo haga perderá la oportunidad de hacer valer sus puntos de vista globales respecto de todo lo que haya aportado al Proceso.

Ocasionalmente algún abogado postulante presenta por escrito conclusiones pero el juzgador en ningún momento está obligado a tomarlas en cuenta en el momento de dictar la sentencia definitiva correspondiente.

Por lo que concluiremos diciendo que en la omisión de la expresión verbal o escrita de alegatos no encuentra el litigante ninguna consecuencia negativa que se toma en cuenta en su perjuicio en el momento en que se dicte la resolución definitiva que de fin a la controversia planteada.

Por lo que al constituir una carga procesal para las partes, la expresión de los alegatos son en sí un imperativo del interés propio y no una obligación. En la práctica forense en los juicios civiles en el Distrito Federal no se alega verbalmente porque ese alegato no lo escucha nadie, además de que no queda constancia en el caso de que se hubiera hecho y para el caso de que presenten las partes sus conclusiones por escrito, el acuerdo que recaerá en dicha promoción se concreta a decir lo siguiente: "TENGACE POR HECHAS LAS MANIFESTACIONES QUE HACE VALER EL PROMOVENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR", lo que pone en evidencia lo obsoleto de dicha etapa procesal en los juicios de naturaleza civil ante los jueces de primera instancia en el Distrito Federal.

### **Efectos Derivados de la Expresión de Alegatos**

La expresión de alegatos podría resultar de mucha utilidad para proporcionar al juez del conocimiento una versión breve y concisa del litigio haciéndole valer razones jurídicas que sustentan las pretensiones o las defensas y excepciones de la parte que alegue. Con los alegatos se trata de argumentar la justificación de cada una de sus respectivas actitudes de las partes, la solidez de sus argumentos jurídicos y la fuerza probatoria de los medios ofrecidos. Con los alegatos se trata de

desvirtuar la fuerza de los medios de prueba ofrecidos y desahogados por la contraparte. Sin embargo, encontramos que la cualidad positiva carece de validez en la Práctica Forense Civil en el Distrito Federal, ya que aunque se haga una detallada exposición de lo alegado y probado a través del escrito de conclusiones de los alegatos resulta un trabajo inútil, ya que el juez no está obligado a tomarlos en cuenta porque dictará la sentencia definitiva aplicando la norma abstracta al caso concreto, ninguna fuerza externa puede coaccionarlo para que falle según el criterio de quien alegue sea actor o demandado quienes están interesados en que se les reconozca que tiene la razón.

El juzgador no puede quedar vinculado por las alegaciones de alguna de las partes, ya que su función no debe ser reemplazada por los abogados patronos, por lo que es libre de tomar en cuenta o no los argumentos expresados por cada una de las partes a través de los escritos respectivos de alegatos resultando lo mismo hacerlo o no hacerlo siendo de importancia mencionar que en los Juzgados de Primera Instancia en el Distrito Federal concretamente en todos aquellos juicios de naturaleza civil, es costumbre que ninguna de las partes alegue ni presente sus conclusiones por escrito por lo que encontramos que al deberse de satisfacer la etapa de alegatos en todo juicio civil, siendo ésta irrelevante e innecesaria atenta contra el principio contenido en el Artículo 17 Constitucional que pregoná la impartición de Justicia pronta.

## CONTENIDO DE LA RESOLUCION QUE RECAE A LA EXPRESION DE ALEGATOS

Ya sea por escrito o verbalmente encontramos que en la práctica forense en el ámbito jurídico en el Distrito Federal la resolución que recaerá a dicho acto procesal es a todas luces irrelevante y como consecuencia intrascendente en la sentencia que da fin a todo juicio de primer instancia de naturaleza civil. Si se llegara el caso de que algún litigante alegará verbalmente ejerciendo con esto el Derecho que le confiere el Código Adjetivo a través de los Artículos 393, 394 y 395 dispondría de quince minutos para hacerlo sin que los presentes en la audiencia estén obligados a seguir paso a paso su retórica y al término se le dará el uso de la palabra a la parte contraria, siendo potestativo para ésta el hacerlo y a pesar de ello quien presida dicha audiencia dictará al oficial mecanógrafo lo siguiente: "TENGASE POR HECHAS LAS MANIFESTACIONES DE LAS PARTES, LAS QUE ALEGARON LO QUE A SU DERECHO CONVINO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR CONSEQUENTEMENTE SE CITA A LAS PARTES PARA OIR SENTENCIA DEFINITIVA", siendo de importancia mencionar que dicho acuerdo hace referencia a que las dos partes alegaron, aunque sólo una de ellas lo haya hecho también es común en los juzgados civiles de primera instancia en el Distrito Federal que aunque ninguna de las partes haya alegado, prácticamente de oficio el Secretario de Acuerdo

al concluirse la recepción de las pruebas admitidas a las partes dictará al oficial mecanógrafo lo siguiente: "NO HABIENDO MAS PRUEBAS PENDIENTES POR DESAHOGAR SE PASO AL PERIODO DE ALEGATOS EN EL QUE LAS PARTES ALEGARON LO QUE A SU DERECHO CONVINO, CONSECUENTEMENTE SE LES CITA PARA OIR SENTENCIA DEFINITIVA", acuerdo que es emitido a pasar de que ninguna de las partes haya hecho uso de la palabra.

Para el caso de que alguna de las partes presente por escrito conclusiones de alegatos como lo prevé el Artículo 394 del Código en comento el acuerdo que recaerá a dicha promoción textualmente dirá lo siguiente:

"Se tiene por presentado al promovente en términos del escrito de cuenta, en el que hace valer sus alegatos, ténganse por hechas las manifestaciones contenidas en el mismo, para los efectos legales a que haya lugar". Es evidente que en dicho acuerdo a la parte que haya presentado sus conclusiones de alegatos, en ningún momento se le reconoce ventaja respecto de la parte contraria por haber dado cumplimiento a dicho acto sólo se le tiene por presentado haciendo valer argumentos tendientes a convencer al juzgador a efecto de que dicte una sentencia favorable a los intereses del promovente, sin embargo el juzgador no está obligado a tomar en cuenta dichas argumentaciones como lo dispone el criterio jurisprudencial emitido por

la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a la letra dice: FALTA DE ANALISIS O REFERENCIA DE LOS ALEGATOS FORMULADOS NO CONSTITUYE VIOLACION DE GARANTIAS POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA,

No constituye violación de garantías por parte de la autoridad responsable la omisión consistente en no tomar en consideración los alegatos de las partes, toda vez que éstos son simples manifestaciones producidas por los contendientes y que no obligan a la autoridad responsable a resolver conforme a su contenido, sino de acuerdo a la litis planteada y a las pruebas recibidas y desahogadas durante el procedimiento.

OCTAVA EPOCA, TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO, SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, TOMO XIV, SEPTIEMBRE, TESIS XX. 282K, PAGINA 332.

#### **OBSERVACIONES RELACIONADAS CON EL ACUERDO EMITIDO POR LA AUTORIDAD A PARTIR DE LA EXPRESION DE ALEGATOS**

El acuerdo que recae a la presentación del escrito de conclusiones de alegatos en ningún momento le reconoce ventaja al litigante que presenta por escrito sus

apreciaciones jurídicas que le favorezcan en el juicio del que es parte y no encontramos consecuencias desfavorables para quien omite presentarlos al no estar obligado el juzgador a tomar en cuenta las apreciaciones personales de cada parte litigante, resulta un trabajo innecesario la expresión de alegatos en todo juicio de naturaleza civil en el Distrito Federal.

Cabe destacar que en la sentencia definitiva que resuelve todo juicio civil encontramos en forma objetiva como la autoridad emisora en ningún momento realiza la importancia de que alguna de las partes o ambas hayan presentado sus conclusiones lo cual podemos constatar en la copia fotostática de una sentencia definitiva dictada en un juicio de primera instancia en el Distrito Federal la cual obra agregada en el presente trabajo en la hoja 109 en dicha resolución la autoridad emisora se concretó a manifestar "ADMITIDAS Y DESAHOGADAS LAS QUE CONFORME A DERECHO PROCEDIERON, PASANDO AL PERIODO DE ALEGATOS EN DONDE LA UNICA EN FORMULAR LOS MISMOS LO QUE FUE LA ACTORA, POR LO QUE PASANDO EL PRESENTE ASUNTO POR TODA SUS ETAPAS PROCESALES, POR PREVEIDO DE FECHA CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE PASARON LOS PRESENTES AUTOS A LA VISTA DEL SUSCRITO A EFECTO DE DICTAR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE...." en esta resolución se hace mención a que una de las partes fue la que expresó sus



alegatos, sin embargo no le reconoce alguna posición de ventaja respecto a la demandada que se abstuvo de hacerlo y todo ello como consecuencia de que el juez no está obligado a tomar en cuenta los alegatos al dictar la resolución como nuestro más alto tribunal lo ha expresado a través del siguiente criterio jurisprudencial que a la letra dice: SENTENCIA DEFINITIVA, LA FALTA DE ESTUDIO DE LOS ALEGATOS DE LAS PARTES. NO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA,

No se contraviene lo dispuesto por el Artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal por no estudiar los alegatos de las partes, puesto que conforme a lo previsto en los Artículos 393 y 712 del ordenamiento legal en cita se infiere únicamente que los litigantes tiene derecho a formularlos, pero en forma alguna imponen la obligación al juzgador de analizarlos al pronunciar sentencia definitiva, pues los mismos no constituyen un punto de la *litis*, la que si debe ser materia de estudio y resolución.

## OCTAVA EPOCA

Sexto tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo X -  
Septiembre, Pág. 371

Ejemplo de una actuación de primera instancia del Distrito Federal que contiene la audiencia de pruebas y alegatos en un juicio civil.



Juzgado \_\_\_\_\_

Secretaría

Exp Núm. \_\_\_\_\_

-

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas del día cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, día y hora señalados para que tenga lugar la continuación de la audiencia de ley fueron presentes en el local del Juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil el actor señor SIMITRIO JUAN VELASCO BAUTISTA quien se encuentra asistido de su abogado patrono Licenciado VICENTE GARCIA SANCHEZ personas debidamente identificadas en autos. Asimismo, comparece el se dice la parte demandada OLGA RAFAELA AMADOR ESCOBEDO quien también se encuentra debidamente identificada en autos. El C Juez declara abierta la audiencia y la preside en uso de la palabra el actor por voz de su abogado patrono manifiesta Que en este acto solicita se declare desierta la prueba confesional a cargo del actor ofrecida por la demandada en virtud de que ésta se encuentra notificada al actor conforme a Derecho no hay personas alguna que le formule posiciones. El C. Juez acuerda: Por hechas las manifestaciones del abogado patrono de la parte actora y toda vez que la parte demandada no se encuentra asistida de Licenciado en Derecho que la represente en este acto con fundamento en el Artículo 46 del Código de Procedimientos Civiles el de la voz procurando equidad entre las partes celebra la presente diligencia y formula las siguientes posiciones a la parte actora. Y estando presente en la Sala de Audiencias el actor quien protestado que fue para que se dice en uso de la palabra la C OLGA RAFAELA AMADOR ESCOBEDO manifesto lo siguiente. Que no quiere



Juzgado \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, Secretaría

Exp. Núm. \_\_\_\_\_

que le hagan ninguna pregunta. El C. Juez acuerda Por hecha la manifestación de la parte demandada y en virtud de que solicita no formularle posiciones a la parte actora el suscrito se abstiene de hacerlo, por lo tanto al no existir pliego de posiciones ni tener la intención la parte demandada de que se le formulen éstas y conforme a la petición hecha por el abogado patrono de la parte actora, se declara desierta la presente prueba confesional, asimismo y con fundamento en el Artículo 46 antes referido gírese oficio a la Defensoría de Oficio a fin de que se le designe un Defensor a la parte demandada, para que ésta no quede en estado de indefensión Por lo que hace a las pruebas documentales ofrecidas por las partes éstas se desahogan por su propia y especial naturaleza y no habiendo más pruebas que desahogarse se pasa al período de Alegatos en el que las partes alegaron lo que a su derecho convino, consecuentemente SE CITA PARA OIR SENTENCIA DEFINITIVA, con lo que se dio por terminado la presente audiencia levántandose acta para constancia firmando en ella los que intervinieron en unión del personal que actúa y da fé, --- DOY FE.-

Ejemplo de una sentencia civil de primer instancia en el Distrito Federal en la que se hace referencia a la etapa de alegatos.



Juzgado \_\_\_\_\_

Secretaría

Exp Núm \_\_\_\_\_

México, Distrito Federal a trece de septiembre de mil novecientos noventa y cinco

--- V I S T O S Los presentes autos del juicio Ordinario Civil, promovido por VELASCO BAUTISTA SIMITRIO JUAN Contra OLGA RAFAELA ESCOBEDO a efecto de dictar sentencia definitiva, y. -----

----- R E S U L T A N D O -----

I.- Que la parte demandada. Por escrito, presentado en fecha veinticinco de enero del mil novecientos noventa y cinco en la Oficialía de Partes Común de este H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, demandó en la vía ordinaria civil de OLGA RAFAELA AMADOR ESCOBEDO. el pago de las siguientes prestaciones: A) La declaración en Sentencia ejecutoriada en el sentido de que soy propietario de la casa y terreno ubicados en el número veintidos de la calle de República de Nicaragua en esta Ciudad. B). La entrega que deberá hacer la demandada del Departamento tres del edificio número 22 de la Calle República de Nicaragua en la Colonia Centro, en esta Ciudad, C.P. 06020 C) El pago de los productos que debió rendir dicho departamento a razón de N\$ 500.00 QUINIENTOS NUEVOS PESOS MENSUALES por concepto del uso y disfrute del mismo, a partir del mes de Enero de mil novecientos noventa y dos Sumando un total de N\$ 12,500 DOCE MIL QUINIENTOS NUEVOS PESOS Hasta el mes de Enero de 1995 y las que se sigan



Juzgado \_\_\_\_\_

Secretaría

Exp. Núm. \_\_\_\_\_

sumando hasta la total terminación de la presente controversia D). El pago de los gastos y costas que origine el presente juicio. Fundándose para tal efecto en los hechos y documentos exhibidos y narrados en su escrito inicial de demanda -----

-----II.- Que por auto de fecha veintiseis de enero se admitió a trámite la demanda, ordenándose emplazar a la demandada por el término de nueve días a efecto de que la contraparte manifestará lo que a su derecho conviniese. Lo cual se hizo dando contestación la demanda al escrito inicial instaurado en su contra, por escrito presentando en fecha veintidos de febrero del presente año, controvirtiendo los hechos y oponiendo defensas y excepciones celebrándose la audiencia previa y de conciliación con fecha veintisiete de marzo de mil novecientos novena y cinco en donde no fue posible llegar a acuerdo alguno, depurándose el procedimiento y abriéndose el juicio a prueba en donde las partes ofrecieron las que a su derecho convino, por lo que admitidas y desahogadas las que conforme a derecho procedieron, pasando al período de alegatos en donde la única en formular los mismos lo fue la actora, por lo que pasando al presente asunto por todas sus etapas procesales, por proveído de fecha cuatro de septiembre del año en curso, se pasaron los presentes autos a la vista del suscrito a efecto de dictar la resolución correspondiente la que ahora se pronuncia al tenor de los siguientes -----

-----C O N S I D E R A N D O -----

-----I.- Que el suscrito juzgador al entrar al análisis de la acción REIVINDICATORIA la que se fundamenta en el Artículo 9 del Código de Procedimientos Civiles, que a la letra dice "Al adquiriente con justo título y de buena fé le compete la acción para que, aun cuando no haya prescrito,



Juzgado \_\_\_\_\_

Secretaria

Exp. Núm. \_\_\_\_\_

le restituya la cosa con sus frutos y acciones en los términos del Artículo 4o.: el poseedor de mala fé: o el que teniendo título de igual calidad ha poseído por menos tiempo que el actor. No procede esta acción en los casos en que ambas posesiones fuesen dudosas o el demandado tuviere su título registrado y el actor no, así como contra el legítimo dueño, por la actora, haciendo estudio en su conjunto de todas y cada una de las constancias ofrecidas por las partes, ajustándose a lo dispuesto por los Artículos 402 y 281 del Código de Procedimientos Civiles, llega a la plena convicción de que la actora no reúne los extremos de su acción toda vez que si bien es verdad exhibe como documento base de la acción un contrato privado de compraventa, acompañando el recibo finiquito que acredita haber hecho el pago correspondiente de la compraventa realizada respecto del inmueble materia de la controversia, también es verdad que la demandada no posee el bien inmueble en carácter de propietaria sino en calidad de Arrendataria, por lo que el juzgador advierte que en la especie existe una acción personal del comprador hoy actora en contra del vendedor de exigir de éste la entrega de la cosa, consistente en el inmueble materia de la controversia, quien es responsable del saneamiento y evicción de la misma; además otra acción personal del arrendador y vendedor SALOMON SMEKE COHEN con la arrendataria hoy demandada OLGA RAFAELA AMADOR ESCOBEDO, quien acredita su relación contractual con el Contrato de Arrendamiento de fecha primero de enero de mil novecientos ochenta y nueve, celebrado entre la demandada y el señor SALOMON SMEKE COHEN, documental que tiene pleno valor probatorio al no ser objetada por la contraria, de conformidad con los artículos 340 y 386 del código de procedimientos



Juzgado \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Secretaría  
Exp Núm. \_\_\_\_\_

civiles, por lo que es aplicable al caso la siguiente jurisprudencia "ACCION REIVINDICATORIA. IMPROCEDENTE CUANDO EXISTE UNA ACCION PERSONAL". En principio, cuando el causante de la posesión de un poseedor derivado pretende exigir de éste o de sus causahabientes la devolución o entrega de la cosa poseída, aquel no está legitimado para ejercitar la acción reivindicatoria, sino la acción personal correspondiente derivada del vínculo jurídico que haya dado origen a la posesión y así, el arrendador no puede reivindicar del arrendatario la cosa dada en arrendamiento, el depositante del depositario de la cosa dada en depósito, el comodante del comodatorio la cosa dada en comodato y en general todos aquellos contratos o actos jurídicos en los que el poseedor debe restituir la cosa que ha recibido por virtud de los mismos PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUARTA PARTE TERCERA SALA. TESIS 12. PAGINA 37. En tales circunstancias el Arrendador debe ejercitar la Acción Personal respectiva de otra manera sino se toma en cuenta que la propiedad que dice tener la demandada es derivada y no original y que se funda en un contrato de arrendamiento equivaldría a ignorar dicho acto jurídico y en virtud de que el análisis del mismo es competente diversa autoridad, es por lo que el suscrito no puede omitir opinión en el sentido de si debe o no declararse por terminado. Si la demandada está o no al corriente del pago de las rentas, por lo que el suscrito con fundamento en el Artículo 281 del Código Adjetivo de la Materia, llega al convencimiento de que la actora no acreditó los elementos constitutivos de su acción fundamental Reivindicatoria y en consecuencia debe absolverse a la demandada de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en su escrito inicial de demanda. \_\_\_\_\_



Juzgado \_\_\_\_\_

Secretaría

Exp. Núm. \_\_\_\_\_

-----II - Por lo que hace a las excepciones opuestas por la demandada, las que se refieren a la falta de legitimación del actor y falta de personalidad quedaron resueltas en la Audiencia Previa y de Conciliación celebrada en el presente juicio y por lo que hace a la falta de acción, la misma es procedente por las razones expuestas en el anterior considerando. -----

-----Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se: -----

----- RESUELVE -----

----- Primero.- Ha procedido la Vía Ordinaria Civil, intentada por la actora en la que ésta no acreditó los elementos constitutivos de su acción y la demandada si justificó en parte sus excepciones y defensas. -----

-----Segundo.- Se absuelve a la demandada OLGA RAFAELA AMADOR ESCOBEDO de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por la actora en su escrito inicial de demanda, por las razones expuestas en el considerando Primero de esta sentencia. -----

-----Tercero - No se hace condena en gastos y costas.-----

-----Cuarto - NOTIFIQUESE -----

-----ASI, Definitivamente juzgando lo resolvió y firma el C.Juez Vigésimo Noveno de lo Civil, Licenciado Juan Hugo Morales Maldonado por y ante el C. Secretario de Acuerdos con quien actúa y da fé. -----



## **INTRASCENDENCIA DE LOS ALEGATOS EN LA SENTENCIA QUE DA FIN AL PROCESO CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL**

Para el Mtro. José Becerra Bautista<sup>[31]</sup> el acto de alegar constituye una carga procesal para las partes litigantes, toda vez que la falta de esto le produce a quien omite alegar consecuencias desfavorables, frente a quien si lo hizo, sin embargo estas consecuencias desfavorables se harían presentes si el juzgador estuviere obligado a tomar en consideración las argumentaciones jurídicas unilaterales vertidas por cada litigante en su ocursio de alegatos, pero al ser potestativo del juez el tomarlos en consideración, encontramos que el período de alegatos carece de relevancia para la autoridad, siendo relativas las consecuencias a que hace mención el autor supraindicado.

Si los alegatos tienen como finalidad convencer al juzgador de la pretensión respecto de la que ha de resolver o respecto de la procedencia de las defensas y excepciones hechas valer por el demandado, fundándose quien promueva en los alegatos y probado pero la autoridad no está obligada por la Ley a tomar en cuenta los criterios contenidos en cada escrito de alegatos, resulta como consecuencia de

---

[31] El Proceso Civil en México. Editorial Porrúa, S.A. México. 1982. Décima Edición. Pág. 157.

ello que en la actualidad los abogados postulantes omiten alegar y tampoco presentan escritos de conclusiones toda vez que les resulta ilógico dar cumplimiento a un acto que en ningún momento les es tomado en cuenta y si a ello le agregamos que, aunque no lo hagan ni verbalmente ni por escrito en la audiencia de pruebas y alegatos, ya agotado el desahogo de las pruebas admitidas, la persona que preside la audiencia (Juez o Secretarios de Acuerdos) sin que medie declaración de alguna de las partes prácticamente de oficio dictará al mecanógrafo: "TODA VEZ QUE NO HAY PRUEBAS PENDIENTES POR DESAHOGAR, SE PASO AL PERIODO DE ALEGATOS, EN EL QUE LAS PARTES ALEGARON LO QUE A SU DERECHO CONVINO, CONSECUEMENTE SE CITA PARA OIR SENTENCIA DEFINITIVA".

En tal virtud encontramos que en los juicios civiles en el Distrito Federal, se debe dar cumplimiento a una etapa procesal que carece de relevancia pero que ocupa un lugar en todo juicio y que mientras no se agote se estará impedido para poder dictarse la resolución definitiva que conforme a Derecho corresponda, de omitirse dicho acto procesal, el juicio de que se trate estaría viciado pues con ello se conculcaría el principio de legalidad que debe prevalecer en todo juicio, violándose a su vez el principio de seguridad jurídica en detrimento de alguna de las partes. Cabe destacar que en la práctica forense en el Proceso Civil si se llegara el caso de que en la última audiencia de desahogo de pruebas faltaren informes o pruebas

diligenciadas a través de exhorto en lugares fuera de la jurisdicción del juzgado esto sería motivo suficiente para que no se pueda pasar al período de alegatos, mientras no se encuentren agregadas en autos dichas probanzas, suspendiéndose dicha audiencia y debiéndose señalar otra exclusivamente para la etapa de alegatos, toda vez que mientras no se de cumplimiento a ésta, no podrá dictarse la resolución definitiva que de fin al juicio.

Es de importancia mencionar que en toda sentencia de primera instancia en materia civil en el Distrito Federal, es evidente que los jueces le restan importancia a los alegatos que las partes pudieron haber producido, vulnerando con ello la importancia que los tratadistas en la materia procesal civil les han dado, ya que en las mencionadas resoluciones no se les reconoce valor alguno en el resultando, sólo se hace referencia a que se dio cumplimiento al período de alegatos, pero en ningún momento se hace mención de la trascendencia que puedan tener éstos en la solución de la controversia planteada, el juzgador se concreta a mencionar en el resultando correspondiente que se paso al período de alegatos en donde las partes alegaron lo que a su Derecho convino.

De lo expuesto podemos afirmar que los alegatos como etapa procesal que forma parte de todo juicio civil de primera instancia en el Distrito Federal, son

irrelevantes tanto en el Proceso como en la Sentencia Definitiva, toda vez que no hay precepto legal que obligue al juzgador a tomarlos en cuenta en el momento de dictar su resolución, ya que éstos son simples manifestaciones producidas por los contendientes que no obligan al Juez a resolver conforme a su contenido, sino de acuerdo a la *litis* planteada y a las pruebas recibidas y desahogadas durante el procedimiento.

Para concluir diríamos que como consecuencia de que los alegatos no son tomados en cuenta por el juzgador en la actualidad la generalidad de los litigantes omiten expresarlos.

## **CAPITULO CUARTO**

### **ANALISIS COMPARATIVO DE LA ETAPA DE ALEGATOS EN OTRAS RAMAS DEL DERECHO**

## **CAPITULO CUARTO**

### **ANALISIS COMPARATIVO DE LA ETAPA DE ALEGATOS EN OTRAS RAMAS DEL DERECHO**

La realidad jurídica en el Distrito Federal en relación a la etapa de alegatos en los juicios de naturaleza civil, es otras y no la figura jurídica ideal a que en todo momento han hecho referencia diversos tratadistas en la materia procesal civil, a través de la diversas obras que en la actualidad encontramos en las librerías.

Cabe destacar que la intrascendencia de la etapa de alegatos en el Proceso Civil en el Distrito Federal, no se da en otras ramas del Derecho, ya que en otras materias dicho acto jurídico es de vital relevancia en la resolución que da fin al juicio

de que se trate. A través del presente capítulo hemos de resaltar aquellas materias en las que los alegatos tienen gran trascendencia en la resolución definitiva y con ello se justifica la existencia de dicho período en el Proceso de que se trate, lo que pone en evidencia la innecesaria existencia del período de alegatos en los juicios de naturaleza civil en el Distrito Federal.

## **EN EL DERECHO PENAL**

En esta rama del Derecho a la etapa de alegatos, se le denomina Conclusiones, los que constituyen el acto mediante el cual las partes analizan los elementos instructorios y sirviéndose de ellos, fijan sus respectivas situaciones como relación al debate que va a plantearse a través de éstas, las partes pretenden expresar en forma concreta el resultado del análisis que ha hecho de los actos introductorios determinando cuál va a ser la posición que van a adoptar para el juicio. Vienen hacer un resumen de lo actuado y su ponderación jurídica.

A diferencia de otras, la materia penal dentro de su ámbito procesal tiene a las conclusiones como un acto obligado imputable a las partes en todo juicio penal, ya que si alguna de ellas omite expresarlas, tendrá que asumir la responsabilidad de las

consecuencias toda vez que el código de procedimientos penales para el Distrito Federal, prevé dicha omisión, estableciendo las sanciones correspondientes para el caso de que alguna de las partes deje de hacerlo, como lo establecen los Artículos 315 y 318 de dicho ordenamiento legal que a la letra dice:

ARTICULO 315.- Transcurridos o renunciados los plazos a que se refiere el Artículo anterior, o si no se hubiere promovido prueba, el juez declarará cerrada la instrucción y mandará poner la causa a la vista del ministerio público y de la defensa durante cinco días por cada uno, para la formulación de conclusiones. Si el expediente excediera de doscientos fojas por cada cien de exceso o fracción se aumentará un día del plazo señalado sin que nunca sea mayor de treinta días hábiles.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el ministerio público haya presentado conclusiones, el juez deberá mediante notificación personal al procurador acerca de esta omisión, para que dicha autoridad formule y ordene la formulación de las conclusiones pertinentes en un plazo de diez hábiles, contados desde la fecha en que se haya notificado la omisión, SIN PERJUICIO DE QUE SE APLIQUEN LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN, pero si el expediente excediere de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracción, se aumentará un día en el plazo señalado sin que nunca sea mayor de treinta días hábiles.



Si transcurren los plazos a que alude el párrafo anterior, sin que se formulen las conclusiones, el juez tendrá por formuladas conclusiones de no acusación y el Procesado será puesto en inmediata libertad y se sobreseerá el Proceso.

ARTICULO 318.- La exposición de las conclusiones de la defensa no se sujetará a regla alguna. Si aquella no fórmula conclusiones en el plazo que establece el Artículo 315 de este código, se tendrán por formuladas las de inculpabilidad Y SE IMPONDRA AL O A LOS DEFENSORES UNA MULTA HASTA DE CIENTO VECES EL SALARIO MINIMO VIGENTE, EN EL DISTRITO FEDERAL O UN ARRESTO HASTA DE TRES DIAS.

En el Proceso Penal el representante social generalmente propone conclusiones acusatorias, sin embargo también pueden ser inacusatorias o exculpatórias dada la calidad que posee como parte de buena fé o parte imparcial, las conclusiones del ministerio público cierran el debate y constituyen en sí la fijación de la controversia, que ya no podrá ser modificada sino en beneficio del reo, excepcionalmente se puede dar este supuesto siempre y cuando sea por causas supervenientes y que dicha modificación pueda constituir un beneficio para el acusado, como lo prevé el Artículo 319 del código en comento que a la letra dice:

ARTICULO 319.- Las conclusiones definitivas del Ministerio Público sólo pueden modificarse por causas supervenientes y en beneficio del acusado. La defensa puede libremente retirar y modificar sus conclusiones en cualquier tiempo hasta antes de que se declare visto el Proceso.

Para el caso de que la defensa incurriera en omitir la presentación de sus conclusiones, éstas se tendrán por no acusatorias como lo prevé el Artículo 318 de la Ley Multicitada, estableciendo dicho numeral la sanción a que se hace acreedora la defensa por hacer incurrido en dicha falta. Cabe destacar que las conclusiones de la defensa tienen más libertad para su presentación, contrario a las normas que en todo momento deberá seguir para su presentación de conclusiones el Ministerio Público.

Terminaríamos diciendo que a diferencia de los alegatos en el Proceso Civil en el Distrito Federal, las conclusiones tienen una transcendencia de gran magnitud en el Proceso Penal y por consiguiente en la sentencia definitiva toda vez que lejos de ser una carga procesal, constituye una obligación para las partes, incluso el Código Procesal de la Materia textualmente prevé un término específico para su formulación, imponiendo que la expresión se haga por escrito, fijando la sanción correspondiente, para quien no las presente. En esta rama del Derecho es evidente la transcendencia

de las conclusiones en toda la sentencia definitiva, ya que del contenido de las presentadas por el Representante Social, depende el rumbo que tomará la resolución que da fin a todo juicio penal, toda vez que de ser no acusatorias y que éstas sean conformadas por el C. Procurador, el juez del conocimiento al recibir dicha solicitud sobreseerá el juicio y ordenará la inmediata libertad del procesado. Supuesto que se encuentra previsto en el Artículo 315 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

## **EN EL DERECHO MERCANTIL**

En la legislación mercantil, concretamente en el Código de Comercio que es de competencia federal encontramos que dentro de la secuela procesal la figura jurídica de los alegatos se encuentra prevista en los Artículos 1388 y 1389 mismo que a continuación se transcriben:

**ARTICULO 1388.** - Concluido el término probatorio, se pondrán los autos a la vista de las partes, para que dentro del término común de tres días produzcan sus alegatos, y transcurrido dicho plazo HAYAN ALEGADO O NO, EL TRIBUNAL DE OFICIO, CITARA PARA OIR SENTENCIA DEFINITIVA la que dictará y notificará dentro del término de quince días.

ARTICULO 1389.- Pasado que sea el término para alegar serán citadas las partes para sentencia.

En los preceptos supraindicados encontramos que en la redacción de su texto a diferencia de la Legislación Procesal Civil para el Distrito Federal, es más clara al establecer específicamente el término para la presentación del escrito de alegatos que las partes pueden exhibir y a su vez pone en evidencia la potestad que tienen éstas en cuanto a presentarlos o no, constituyendo en sí para los litigantes una carga procesal en el Proceso Mercantil. A diferencia del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el Código de Comercio a través del Artículo 1388, hace más ágil el desarrollo del Proceso, ya que contrario al Proceso Civil que es requisito *sine quanon* el agotarse el período de alegatos para estar en posibilidad de citarse para oír sentencia definitiva, en esta rama del Derecho es claro el Artículo en comento al establecer que transcurrido el lapso para alegar, lo hayan hecho o no el tribunal de oficio citará para oír sentencia definitiva la que se dictará y notificará dentro del término de quince días.

De lo expuesto podemos concluir que si bien es cierto en el Proceso Mercantil los alegatos no constituyen trascendencia jurídica, tampoco constituyen un medio que retarde la pronunciación de la resolución definitiva, lo cual constituye una ventaja en

relación a la Legislación Procesal Civil para el Distrito Federal, toda vez que en esta última encontramos que mientras no se de cumplimiento verbalmente o por escrito al periodo de alegatos, el juez del conocimiento estará impedido para dictar la sentencia definitiva que conforme a Derecho corresponda.

Es evidente que el Código de Comercio es más claro y práctico en su redacción respecto a los alegatos, ya que establece días específicos y aclara que nunca será impedimento para dictar la sentencia correspondiente el hecho de que alguna de las partes incurra en la omisión de la expresión de alegatos, constituyendo con esto un hecho acorde con el espíritu del Artículo 17 Constitucional que propugna por la impartición de justicia pronta completa e imparcial, lo que de nueva cuenta pone en evidencia la obsoleta existencia del periodo de alegatos en los juicios civiles en el Distrito Federal.

## **EN EL DERECHO FISCAL**

Los juicios de naturaleza Fiscal deberán promoverse ante el Tribunal Fiscal de la Federación en la Delegación correspondiente, será a través de un procedimiento contencioso administrativo que es regulado por el Código Fiscal de la Federación y

para el caso de que existiere alguna laguna en dicho ordenamiento se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.

En los juicios que se tramitan ante las autoridades fiscales son admisibles toda clase de medios de prueba, con excepción de la prueba confesional a cargo de las autoridades mediante la absolución de posiciones, Podemos encontrar comúnmente el ofrecimiento de las siguientes pruebas: La testimonial, pericial, documentales, inspección, hechos notorios y la presuncional, al término de las pruebas admitidas y desahogadas la Legislación en comento prevé que deberá tener verificativo el período de alegatos como a continuación se transcribe el Artículo respectivo.

**ARTICULO 235.-** El Magistrado Instructor, diez días hábiles después de que haya concluido la sustanciación del juicio y no existiere ningún pendiente que impida su resolución, notificará por lista a las partes que tienen un término de cinco días para formular sus alegatos por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia.

Al vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, quedará cerrada la instrucción sin necesidad de declaratoria expresa.

Encontramos que en esta rama del Derecho, el Legislador fue claro y concreto en cuanto a la figura jurídica de los alegatos al establecer un término concreto para su expresión. Es evidente que a partir de la redacción del Artículo anterior el procedimiento contencioso administrativo dentro de su Proceso tiene a la etapa de alegatos como una carga procesal pero que a su vez va más allá del espíritu plasmado por el legislador en el Código Adjetivo Civil para el Distrito Federal en cuanto a dicha etapa procesal, ya que en el ámbito fiscal existen grandes diferencias que justifican la existencia de los alegatos en sus juicios, tal es el caso que la expresión de alegatos en el Proceso Fiscal no retarda la emisión de la resolución respectiva, lo que si acontece en los juicios civiles en el Distrito Federal.

Establece la forma en que deberán presentarse dichas argumentaciones jurídicas, la cual será por escrito aclarando que para el caso de que alguna de las partes o ambas alegaran prevé el Legislador que los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados en el momento de dictar la sentencia lo que pone en evidencia la trascendencia que constituya alegar en dichos juicios. La figura de los alegatos en el Proceso Fiscal es a todas luces justificada y de gran beneficio para quien lo hace, ya que la expresión de éstos o el incurrir en su omisión no son inconveniente que retarde la emisión de la resolución definitiva y si se llegara a alegar la autoridad por virtud del Artículo en comento, está obligado a tomar en cuenta los

argumentos planteados, ya que su texto es claro en cuanto a la forma y término para su presentación.

Para el Mtro. Humberto Briseño Sierra<sup>[32]</sup> los alegatos han perdido la importancia y hasta su razón de ser, que obedece aunque el código lo silencie, al hecho de que la contienda en su generalidad puede limitarse a puntos de Derecho.

Concluiríamos diciendo que la figura jurídica de los alegatos en el Proceso Fiscal tiene razón de ser ya que justifica su carácter de carga procesal, toda vez que el Legislador obliga por virtud del Artículo multicitado a tomar en consideración dichas argumentaciones al emisor de la sentencia definitiva del juicio del que se trate y contrario al Proceso Civil en el Distrito Federal no obstruye el omitir dicho acto jurídico la emisión de la sentencia definitiva.

Es importante resaltar las grandes diferencias existentes entre el Proceso Fiscal y el Proceso Civil en el Distrito Federal:

- a) Señala un término específico para su expresión, el Código de Procedimientos Civiles a través de los Artículos 393 y 394 omite señalar al tiempo con el que

---

[32] Derecho Procesal Fiscal, Editorial Porrúa, S.A. México. 1990. Segunda Edición.



cuentan las partes para presentar sus conclusiones de alegatos por escrito.

- b) Establece la forma en que deberán hacerse, siendo únicamente por escrito en el Distrito Federal en el Proceso Civil el sistema es ecléptico.
- c) En el Código Fiscal de la Federación se establece la obligación del juzgador de tomar en cuenta los alegatos al momento de dictar la sentencia, en el Código de Procedimientos Civiles existe omisión al respecto.
- d) En el Proceso Fiscal presentados o no los alegatos al vencer el término concedido para su expresión se cierra la instrucción sin necesidad de declaratoria expresa. En el Distrito Federal en los juicios civiles mientras no se agoten la etapa de alegatos no se cita para oír sentencia definitiva.

## **EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO**

El nacimiento del Derecho Administrativo conlleva a la implantación de un Proceso que señalará la secuela a seguir para dirimir las controversias derivadas de la necesidad de defensa del particular frente a los actos de la administración pública,

su materia está constituida por el conflicto jurídico que crea el acto de la autoridad administrativa al vulnerar derechos subjetivos o agravar intereses legítimos de algún particular o de otra autoridad autárquica por haber infringido aquella de algún modo la norma legal que regula su autoridad y a la vez protege tales derechos o intereses.

La defensa de los particulares frente a la administración pública puede realizarse de diferentes formas y ante distintos órganos jurisdiccionales, el Tribunal Fiscal de la Federación y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo son los principales receptores de demandas en materia administrativa en lo que respecta al Distrito Federal. Es importante mencionar que de éstas dos autoridades se deriva una substancial diferencia en la prosecución de los juicios tendientes a resolver las controversias planteadas, ambas autoridades establecen procedimientos distintos a seguir a partir de la presentación de la demanda, siendo importante mencionar que mientras en los juicios que se ventilan ante el Tribunal Fiscal de la Federación, se contempla la figura de los alegatos estableciendo el Código Fiscal de la Federación los términos y condiciones para su expresión, en los procedimientos seguidos ante otras autoridades administrativas no se contempla la figura jurídica de los Alegatos, ya que a partir del desahogo de la última prueba se pasa para que dicte la resolución que conforme a Derecho corresponde, a diferencia que en el procedimiento contencioso administrativo que se sigue ante el Tribunal Fiscal de la Federación el

cual si prevé dicha etapa procesal a través del Artículo 235 del Código Fiscal de la Federación que a continuación se transcribe.

ARTICULO 235. - El Magistrado Instructor, diez días después de que haya concluido la substanciación del juicio y no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución notificará por lista a las partes que tienen un término de cinco días para formular alegatos por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia.

Al vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior con alegatos o sin ellos quedará cerrada la instrucción sin necesidad de declaratoria expresa.

Ante las demás autoridades administrativas que se siga el juicio o el procedimiento administrativo correspondiente se regulará su secuela procesal en base a la Ley de la Materia de que se trate, siendo de importancia aclarar que ante el tribunal de lo contencioso administrativo los juicios que se presentan en todas y cada una de sus etapas se siguen por escrito, una característica muy particular del Proceso Administrativo es que los juicios son resueltos en forma pronta, toda vez que en su generalidad éstos se derivan de una mala aplicación de la Ley en perjuicio del particular.

Por lo que concluiríamos diciendo que en el Proceso Administrativo, salvo los juicios que se llevan ante el Tribunal Fiscal de la Federación, la generalidad de las demás controversias prevén procedimientos breves que no contemplan a los alegatos como una etapa, esto es no existen en dichos procedimientos administrativos.

## **EN EL DERECHO AGRARIO**

En esta rama del Derecho existe una pluralidad de procedimientos y de juicios para dirigir las controversias del agro-mexicano, según el tipo de procedimiento o tipo de juicio es como serán los términos para seguir la obtención del resultado pretendido. En el Proceso Agrario la expresión de alegatos únicamente contempla la forma escrita y respecto a los días que se tienen para la presentación del escrito respectivo según el tipo de juicio o procedimiento será el término de que se goce para formular los alegatos como a continuación se transcriben:

- a) Para el juicio de inconformidad en los conflictos por límites de bienes comunales el término para alegar es de cinco días como lo prevé el Artículo 384 de la Ley Federal de la Reforma Agraria que a la letra dice:

ARTICULO 403.- Los propietarios y demás afectados podrán ocurrir por escrito ante la Secretaría dentro de los quince días siguientes a la publicación de la solicitud, exponiendo lo que a su derecho convenga y rindiendo las pruebas y alegatos pertinentes.

- d) Procedimiento para conflictos por límites de bienes comunales en éste, el término para alegar es mayor a los anteriores como a continuación se presenta:

ARTICULO 372.- Concluidos los trabajos y los estudios anteriores, la delegación agraria los pondrá a la vista de las partes y abrirá un plazo de sesenta días improrrogables para que se presenten pruebas y alegatos.

- e) Procedimiento de Nulidad de Fraccionamientos de Bienes Comunales, en este caso encontramos que las partes cuentan con noventa días para rendir pruebas y expresar sus alegatos como a continuación se señala:

ARTICULO 393.- Las partes dispondrán de un término de noventa días a partir de la junta a que se refiere el Artículo anterior para rendir pruebas y formular alegatos.

El desarrollo de dichos procedimientos, así como de los juicios de que se trate se lleva a cabo ante las delegaciones agrarias según la localidad de que se trate. Agotadas todas y cada una de las diligencias de prueba y oídos, los alegatos el delegado regional lo enviará a la Secretaría de la Reforma Agraria con el resumen del caso y su opinión fundando respecto del mismo sus apreciaciones personales, escuchando dicha institución la opinión del Instituto Nacional Indigenista y con ello elaborará un dictamen que se llevará para resolución al Presidente de la República y será éste quien decidirá el conflicto entre los núcleos de población, resolución que podrá ser impugnada a través de un juicio de inconformidad que se radicará ante la suprema corte de justicia de la nación.

En materia agraria podemos encontrar que existen situaciones que se ventilan a través de verdaderos juicios que se llevan a cabo ante autoridades y órganos agrarios con contienda de partes como son: La restitución, la dotación, las privaciones y nuevas adjudicaciones, la nulidad de fraccionamientos, la creación de nuevos centros de población cuando se finca en terrenos afectados, las permutas de bienes ejidales, etc., otro clase de procedimientos son de tipo netamente administrativo agrario, porque el Ejecutivo Federal aplica la Ley sin disputas entre las partes; por ejemplo, la expropiación de bienes comunales, la inafectabilidad agrícola ganadera y agropecuaria, los decretos concesión de inafectabilidad ganadera, la división de ejidos, la fusión de ejidos, las permutas entre ejidos o ejidatarios, la

confirmación de posesión de bienes comunales, etc.

En una tercera categoría se sitúan los procedimientos mixtos, siendo aquellos que se desarrollan parte ante tribunales y magistratura agrarios y que también se desarrollan ante autoridades judiciales, como es el caso de la segunda instancia en el conflicto por linderos comunales que por inconformidad con la propuesta residencial interponen los interesados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Del análisis de los procedimientos y juicios agrarios podemos afirmar que en esta rama del Derecho el Legislador a través de la Ley Federal de la Reforma Agraria fue omiso en relación a la etapa de alegatos, concretamente respecto al efecto que se da con motivo de la omisión en la expresión de éstos o en su caso cuál es el beneficio para quien lo haga, por lo que deduciremos que el cumplimiento de dicho acto jurídico puede constituir una carga procesal para los contendientes, pero que es evidente que no constituye trascendencia jurídica en la resolución definitiva.

## **EN EL DERECHO LABORAL**

En el Derecho Laboral encontramos que la etapa de alegatos no constituye gran trascendencia jurídica ni en el Proceso ni en el laudo que da fin a todo juicio,

cabe destacar que incluso en esta rama del Derecho los Legisladores dada la poca importancia que le dieron a los alegatos incurrieron en omisiones tales como, no señalar ni término específico para su expresión ni tampoco la forma concreta de hacerlo, tal es el caso que en los Artículos 882, 884 y 885 de la Ley Federal del Trabajo es donde encontramos en forma objetiva dichas lagunas y para efecto de hacer tal apreciación se transcriben a continuación dichos numerales.

ARTICULO 882.- Si las partes están conformes con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de Derecho, al concluir la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, se otorgará a las partes término para alegar y se dictará el laudo.

ARTICULO 884.- La audiencia de desahogo de pruebas se llevará cabo conforme a las siguientes normas:

1. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentran debidamente preparadas, procurando que sean primeramente las del actor e inmediatamente las del demandado o en su caso aquellas que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha.



2. Si faltare por desahogar alguna prueba por no estar debidamente preparada, se suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio a que se refiere esta Ley.
3. En caso de que las únicas pruebas que faltaren por desahogar sean copias o documentos que hayan solicitado las partes, no se suspenderá la audiencia, sino que la junta requerirá a la autoridad o funcionario omiso le remita los documentos o copias; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieran con esa obligación a solicitud de parte, la junta se lo comunicará al superior jerárquico para que se le aplique las sanciones correspondientes, y
4. Desahogadas las pruebas las partes en la misma audiencia podrán formular sus alegatos.

ARTICULO 885.- Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no se quedan pruebas por desahogar, el auxiliar de oficio declarará cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo que deberá contener:

1. Un extracto de la demanda y de la contestación réplica y contrarréplica y en su caso de la reconvención y contestación de la misma.
2. El señalamiento de los hechos controvertidos.
3. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas y su apreciación en conciencia señalando los hechos que deban considerarse probados.
4. Las consideraciones que fundadas y motivadas se derivan en su caso DE LO ALEGADO Y PROBADO, y
5. Los puntos resolutivos.

Es de importancia destacar que la Ley Federal del Trabajo en su redacción original de 1931 en el Artículo 531 autorizaba a las partes o a sus defensores para que alegaran única y exclusivamente sobre las pruebas rendidas y sus apreciaciones respecto de los hechos en, que no existía conformidad entre ellos se autorizaba hacerlo oralmente o por escrito estableciendo para ello treinta minutos al finalizar el desahogo de todas y cada una de las pruebas, si el litigante decidiera hacerlo verbalmente y cuarenta y ocho horas si lo hiciera por escrito.

En la reforma que hubo en 1970 se resolvió que sólo se concederían cuarenta y ocho horas para la expresión de alegatos por escrito, derogando los treinta minutos que se tenían para hacerlo verbalmente. Sin embargo, en la reforma de 1980 a través del Artículo 884 Fracción 4a. disponía que las partes en la misma audiencia podrán formular sus alegatos, no estableciendo en dicho texto si serían por escrito o verbalmente, por lo que da pauta a que se haga de una u otra forma, sin embargo puede presentarse un problema cuando la instrucción no concluye durante el desarrollo de la audiencia por ejemplo cuando falta algún informe atribuible a alguna autoridad, cuando exista algún exhorto que recibir o el informe de alguna inspección practicada en lugar distinto de la junta de conciliación que corresponda. En esos casos no se dan las circunstancias que pueden propiciar el alegato oral y la Ley no señala forma de resolver dicha laguna.

Es importante aclarar que concluido el desahogo de las pruebas, formulados o no los alegatos, a partir de la certificación que haga el Secretario en el sentido de que ya no hay prueba pendiente por desahogar, el auxiliar de oficio dictará un proveído declarando cerrada la instrucción, para que en un término de diez días elabore un proyecto de resolución en forma de laudo.

De lo anterior podemos mencionar que, si bien es cierto que en la Fracción IV del Artículo 885 se hace referencia a que el hacer el proyecto de resolución en forma de laudo, el auxiliar deberá anotar las consideraciones que se deriven de lo alegado, también es cierto que en los dos Artículos restantes antes mencionados el Legislador fue omiso al no establecer la forma y el término en forma específica para la expresión de alegatos, tampoco se hace referencia a sanción alguna que se le impondrá a los litigantes para el caso de que no alegarán.

La etapa de alegatos podría representar en el Derecho Laboral un momento fundamental en el Proceso, ya que a través de ellos se orientaría a las autoridades laborales respecto de lo alegado y probado en todo juicio. Sin embargo, en la práctica forense para los litigantes laboristas, la generalidad de éstos entienden al acto de alegar como algo repetitivo de lo que ya sea ha planteado por lo que en la actualidad desestiman su importancia.

Podemos concluir que en la rama laboral si bien es cierto la Legislación prevé la figura jurídica de los alegatos como lo hemos expuesto, también es cierto que, para los litigantes de dicha materia la expresión de éstos carece de relevancia por considerarlo simplemente como un acto repetitivo de lo ya planteado. Sin embargo, es de importancia mencionar que a diferencia del Proceso Civil en el Distrito Federal

si se toman en consideración las alegaciones presentadas por las partes según lo prevé la Fracción cuarta del Artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que la existencia de la etapa procesal multicitada en el Proceso Laboral es justificada y no obsoleta como en el Proceso Civil en el Distrito Federal.

## **EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL**

En la Ley de Amparo encontramos previstos dos tipos de Juicios Constitucionales, también denominados Juicios de Garantías a través de los Artículos 114 y 158 de la Ley supraindicada encontramos el Juicio de Amparo Indirecto y el de Amparo Directo respectivamente, el primero de los mencionados debe promoverse ante el Juzgado de Distrito de la localidad de que se trate, el segundo en mención deberá promoverse ante la autoridad emisora del acto violatorio de Garantías Individuales, las que encontramos previstas en los primeros veintinueve Artículos de nuestra Carta Magna.

La Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un procedimiento diferente para la substanciación de cada uno de los Juicios supraindicados. Cabe destacar que el

Amparo Indirecto para su Admisión deberá estar dentro de los supuestos previstos por el Artículo 114 de la Ley de Amparo, encontrándose dentro del procedimiento a seguir que la etapa de alegatos tendrá verificativo en la Audiencia Constitucional prevista en el Artículo 155 de la Ley en comento que a la letra dice:

ARTICULO 155.- Abierta la audiencia se procederá a recibir por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y en su caso el pedimiento del Ministerio Público, acto continuo se dictará el fallo que corresponda.

El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el Artículo 22 de la Constitución Federal, asentándose en autos extractos de sus alegatos si se solicitare.

En los demás casos, las partes podrán alegar verbalmente pero sin exigir que sus alegaciones se hagan constar en autos y sin que los alegatos pueden exceder de media hora por cada parte incluyendo las réplicas y contrarréplicas.

Del texto del precepto legal antes invocado podemos afirmar que en este juicio el Legislador otorgó al quejoso el Derecho de poder alegar tanto verbalmente como

por escrito, es decir que se contempló el sistema ecléctico, sin embargo las alegaciones verbales en la actualidad están en desuso estableciendo a continuación de los alegatos la emisión de la resolución correspondiente. En cuanto a la trascendencia jurídica de éstos en la resolución que emite el juez de Distrito, no existe en la Ley de Amparo algún precepto que lo obligue a tomarlos en cuenta, por no ser materia de la litis.

En relación a la procedencia de la demanda de Garantías a través del Amparo Directo, ésta se radica ante los Tribunales Colegiados de Circuito que corresponda, según la localidad de que se trate. Para su admisión la demanda deberá estar dentro de los supuestos jurídicos previstos por los Artículos 158, 159 y 160 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La substanciación del juicio se encuentra prevista por el Artículo 180 de la Ley en comento, en dicho precepto se establece el Derecho del Tercero Perjudicado y del Ministerio Público Federal para presentar sus alegaciones por escrito, como a continuación se puede apreciar en su texto que a letra dice:

ARTICULO 180. - El Tercero Perjudicado y el Agente del Ministerio Público que hayan intervenido en el Proceso en asuntos del orden penal, podrán presentar sus alegaciones por escrito directamente ante el Tribunal Colegiado de Circuito dentro del término de diez días contados desde el día siguiente al del emplazamiento a que se refiere al Artículo 167.

Es de importancia comentar que la Ley de Amparo en el apartado referente a la substanciación del Juicio de Amparo Directo, sólo hace referencia a la posibilidad que tienen para alegar el tercero perjudicado y el representante social, Derecho que sólo se podrá ejercitar en asuntos del orden penal, por lo que es evidente que en las demás materias no se contempla la figura jurídica de los alegatos. Incluso en materia penal el precepto 183, impone al Tribunal Colegiado el deber de estudiar dichas alegaciones, cuando el quejoso invoque la extinción de la acción persecutoria y llega al extremo de que suplirá la deficiencia de la queja si la hubiere alegado en forma no muy clara por lo que en el Amparo Indirecto sin importar la materia se prevé el Derecho de Alegar, en el Directo sólo se puede hacer en juicios del orden penal.

De lo expuesto es de mencionar que, en el juicio de garantías su Proceso prevé la figura jurídica de los alegatos en sus dos tipos de juicios: indirecto y directo, estableciendo en cada uno de ellos un procedimiento diferente, existiendo



substantialmente grandes diferencias como son: término para su expresión, forma de alegar en el indirecto puede ser verbalmente o por escrito, en el directo sólo por escrito y exclusivamente en materia penal.

Y encontramos que sólo en el Amparo Directo tratándose de juicios del orden penal la Ley en comento obliga a la autoridad a estudiar las alegaciones esgrimidas, ya que en las demás materias no se encuentra previsto como una obligación para la autoridad el estudio de los alegatos por no considerarseles parte de la *litis* como a continuación lo establece la siguiente jurisprudencia que a la letra dice:

### **EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A EXAMINAR LOS ALEGATOS POR NO FORMAR PARTE DE LA LITIS**

El Juez de Distrito está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación pero en rigor no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos ya que no lo exigen los Artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo.

Apéndice 1975; Segunda Sala; Tesis 323 p. 564; Apéndice 1985, Pleno y Salas, Tesis 42 p. 67.

En virtud de lo expuesto podemos concluir diciendo que en el juicio constitucional se prevé a los alegatos como una carga procesal y sólo en el Amparo Directo en Materia penal la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone al Tribunal Colegiado el deber de someter a estudio lo alegado por el quejoso cuando éste invoque la extinción de la Acción persecutoria, por lo que en este único supuesto se justifica la existencia de los alegatos en dicho Proceso.

## **CAPITULO QUINTO**

### **CONCLUSIONES**

## CAPITULO QUINTO

### CONCLUSIONES

#### PRIMERA

Del análisis de la fuentes históricas, se concluye que los procesos jurisdiccionales de todos los pueblos tienen rasgos comunes y paralelos y que el proceso tuvo una formación natural por lo que no es descubrimiento exclusivo de pueblo alguno.

#### SEGUNDA

Los Aztecas dentro de su grado de evolución social, contaban con la existencia de tribunales que desarrollaban en sus instancias un proceso debidamente organizado.

#### TERCERA

La impartición de justicia de los aztecas era pronta, un ejemplo lo constituyeron los jueces en el mercado de Tlaltelolco, que acudían a la plaza antes de su instalación y se retiraban hasta que quedaba vacía, estando siempre prestos a administrar justicia rápida y expedita en el lugar donde se les necesitare.

#### CUARTA

El proceso jurídico está formado por estadios que tienen una función bien definida que justifica su existencia en la búsqueda de la verdad por lo tanto cada acto que lo conforma tiene una razón de ser.

#### QUINTA

Los alegatos son los argumentos jurídicos que expresan los litigantes, por virtud de los cuales destacan ante el juzgador las pruebas propias y de su contraparte que les benefician, con el fin de producir convicción en su ánimo respecto de la aplicabilidad de la norma abstracta al caso del que son parte.

#### SEXTA

Los alegatos son parte fundamental en el proceso porque a través de éstos las partes destacan ante el juzgador apreciaciones generales respecto del juicio que al momento de resolver pudieran pasarle desapercibidos.

#### SEPTIMA

En el proceso Fiscal se impone al juzgador la obligación de tomar en cuenta los alegatos expresados por las partes al dictar la sentencia definitiva, como lo prevé el Código Fiscal de la Federación a través del Artículo 235.

## OCTAVA

En el Derecho Penal la omisión de la expresión de conclusiones por parte del representante social tiene como efecto inmediato el sobreseimiento del Proceso y la inmediata libertad del reo y para el caso de que la defensa incurra en dicha falta se le impone una sanción, situaciones que ponen en manifiesto la trascendencia de esta figura jurídica en esta rama del derecho.

## NOVENA

Los alegatos constituyen una carga procesal en material civil considerando en esta rama del derecho los procedimientos; Familiar, Arrendamiento Inmobiliario, Concursal y de Inmatriculación Inmobiliaria, por lo que no existe precepto que obligue al juzgador a tomarlos en cuenta al momento de dictar la sentencia definitiva, lo cual los hace irrelevantes.

## DECIMA

La existencia del período de alegatos en los juicios de naturaleza civil en el Distrito Federal, atenta contra la impartición de justicia pronta que proclama el Artículo 17 Constitucional.

#### DECIMA PRIMERA

El Distrito Federal en los juicios de naturaleza civil, si no se da cumplimiento al período de alegatos, el juzgador no cita para oír sentencia definitiva, pues sería violatorio de la garantía de seguridad jurídica contenida en el Artículo 14 de nuestra Carta Magna.

#### DECIMA SEGUNDA

Los jueces en materia civil en el Distrito Federal no toman en consideración las conclusiones de alegatos, por lo que en la actualidad los litigantes se abstienen de presentarlas sin embargo en algunos estados de la Federación tienen trascendencia en la sentencia definitiva, ejemplo de ello es el Estado de Querétaro.

#### DECIMA TERCERA

Los Alegatos no forman parte de la litis como lo establece la Suprema Corte de justicia de la Nación a través de la Jurisprudencia correspondiente, por lo que el juzgador no está obligado a considerarlos al momento de pronunciar la sentencia definitiva.

#### DECIMA CUARTA

En el Distrito Federal los Alegatos expresados en materia civil, no tienen la relevancia que tienen en el proceso penal por lo que deben suprimirse.

## BIBLIOGRAFIA

### Obras Consultadas:

1. Arellano García Carlos, Derecho Procesal Civil, Editorial Porrúa, S. A., México. 1994, Primera Edición.
2. Arellano García Carlos, Práctica Jurídica, Editorial Porrúa, S. A., México 1987. Segunda Edición.
3. Arellano García Carlos, Práctica Forense del Juicio de Amparo, México Editorial Porrúa, S. A., 1993. Octava Edición.
4. Arellano García Carlos, Práctica Forense Mercantil, Editorial Porrúa, S. A., México, 1988. Tercera Edición.
5. Arellano García Carlos, Práctica Forense Civil y Familiar, Editorial Porrúa, S. A., México, 1994, Décima Cuarta Edición.



6. Becerra Bautista José, El Proceso Civil en México, Editorial Porrúa, S. A., México, 1982, Décima Edición.
7. Briseño Sierra Humberto, Derecho Procesal Civil, Editorial Cárdenas, Tomo IV, México, 1970.
8. Briseño Sierra Humberto, Derecho Procesal Fiscal, Editorial Porrúa, S. A., México, 1990, Segunda Edición.
9. Briseño Sierra Humberto, El Juicio Ordinario Civil, Editorial Trillas, Tomo II, México, 1978.
10. Cervantes Ahumada Raúl, Derecho Mercantil Primer Curso, Editorial Herrero, México, 1984.
11. Clavijero Francisco Javier, Historia de la Conquista de México, Editorial Porrúa, S. A., México, 1979.
12. Chávez Padrón Martha, El Proceso Social Agrario y sus Procedimientos, Editorial Porrúa, S. A., México, 1989, Sexta Edición.

13. Chávez Padrón Martha, El Derecho Agrario en México, Editorial Porrúa, S. A., México, 1991, Décima Edición.
14. Chiovenda José, Principios de Derecho Procesal Civil, Editorial Cárdenas, México, 1987, Tomos I y II.
15. De Buen L. Néstor, Derecho Procesal del Trabajo, Editorial Porrúa, S.A., México, 1994, Tercera Edición.
16. De la Cueva Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Editorial Porrúa, S.A., México, 1994.
17. De Pina Rafael - Castillo Larrañaga José, Derecho Procesal Civil, Editorial Porrúa, S.A., México, 1980.
18. Domínguez del Río Alfredo, Compendio Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil, Edit. Porrúa, S.A., México, 1977.
19. Esquivel Obregón Toribio, Apuntes para la Historia del Derecho en México, Editorial Porrúa, S.A., México, 1984. Segunda Edición.

20. Fraga Gabino, Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, S.A., México, 1980.
21. Flores Gómez González Fernando - Carvajal Moreno Gustavo, Nociones de Derecho Positivo Mexicano, Editorial Porrúa, S.A., México, 1979.
22. Fondo de Cultura Económica, Los Indios de México y de Nueva España, México, 1971.
23. García Ramírez Sergio, Curso de Derecho Procesal Penal, Editorial Porrúa, S.A., México, 1992.
24. Gómez Lara Cipriano, Derecho Procesal Civil, Editorial Trillas, México, 1984, Primera Edición.
25. Luna Arrollo Antonio, Derecho Agrario Mexicano, Editorial Porrúa, S.A., México, 1990.
26. Mantilla Molina Roberto, Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, S.A., México, 1985.

27. Margadant S. Guillermo F., Derecho Romano, Editorial Porrúa, S.A., México, 1974.
28. Mendieta y Núñez Lucio, Historia de la Facultad de Derecho, Editorial Porrúa, S.A., México, 1956.
29. Ovalle Favela José, Derecho Procesal Civil, Editorial Harla, México, 1987. Segunda Edición.
30. Pallares Eduardo, Derecho Procesal Civil, Editorial Porrúa, S.A., México, 1974.
31. Pallares Eduardo, Tratado de las Acciones Civiles, Editorial Porrúa, S. A., México, 1985, Quinta Edición.
32. Rocco Hugo, Teoría General del Proceso, Editorial Porrúa, S.A., México, 1960.
33. Zamora Pierce Jesús, Derecho Procesal Mercantil, Editorial Cárdenas, México, 1981, Quinta Edición.

## Otras Fuentes:

34. Código Mendocino, Editorial Herrero, México, 1967.
35. Pallares Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, Editorial Porrúa, S.A., México, 1994, Vigésima Primera Edición.
36. Campos Aburto Rodrigo, Tesis para Obtener el Título de Licenciado en Derecho, Principios Rectores del Proceso, U.N.A.M., México, 1982.
37. Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Número 80, México, 1994. Editorial Themis.
38. Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Editorial Calpe, S.A., Madrid, España, 1970, Décimo Novena Edición.
39. Prontuario Tributario, Editorial Tax, Editores Unidos, S.A., México, 1996, Octava Edición.

40. Jurisprudencia 1917-1988, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Tribunal Pleno, Ediciones Mayo, México, 1989.
41. Diccionario para Juristas, Palomar de Miguel Juan, Ediciones Mayo, México, 1981, Primera Edición.
42. Pequeño Larousse Ilustrado, García Pelayo Ramón y Gross, Ediciones Larousse, S.A., México, 1995, Decimonovena Edición.
43. Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito Octava Epoca, Tomo X, Septiembre 1992, México.

#### **Legislación:**

44. Ley Federal de la Reforma Agraria, Editorial Alco, México, 1996.
45. Código de Procedimientos Civiles para el D.F., Editorial Porrúa, S.A., México, 1996.

46. Código de Comercio y Leyes Complementarias, Editorial Porrúa, S.A., México, 1995.
47. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Porrúa, S.A., México, 1997.
48. Código de Procedimientos Penales para el D.F., Editorial Sista, S.A., México, 1996.
49. Ley Federal del Trabajo, Comentarios, Prontuario, Jurisprudencia, Editorial Porrúa, S.A., México, 1996.
50. Nueva Legislación de Amparo, Editorial Sista, S.A., México, 1995.